

Tema 17



Violencia de género

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Además, continúa nuestra Carta Magna, estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio. La Organización de Naciones Unidas en la IV Conferencia Mundial de 1995 reconoció ya que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz y viola y menoscaba el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además la define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Existe ya incluso una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada que consiste en «las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género

masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral». En la realidad española, las agresiones sobre las mujeres tienen una especial incidencia, existiendo hoy una mayor conciencia que en épocas anteriores sobre ésta, gracias, en buena medida, al esfuerzo realizado por las organizaciones de mujeres en su lucha contra todas las formas de violencia de género. Ya no es un «delito invisible», sino que produce un rechazo colectivo y una evidente alarma social.

Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud. En los últimos años se han producido en el derecho español avances legislativos en materia de lucha contra la violencia de género, tales como la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de Medidas Concretas en Materia de Seguridad Ciudadana, Violencia Doméstica e Integración Social de los Extranjeros; la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, o la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica; además de las leyes aprobadas por diversas Comunidades

Autónomas, dentro de su ámbito competencial. Todas ellas han incidido en distintos ámbitos civiles, penales, sociales o educativos a través de sus respectivas normativas. La Ley pretende atender a las recomendaciones de los organismos internacionales en el sentido de proporcionar una respuesta global a la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Al respecto se puede citar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer de 1979; la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer, proclamada en diciembre de 1993 por la Asamblea General; las Resoluciones de la última Cumbre Internacional sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995; la Resolución WHA49.25 de la Asamblea Mundial de la Salud declarando la violencia como problema prioritario de salud pública proclamada en 1996 por la OMS; el informe del Parlamento Europeo de julio de 1997; la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1997; y la Declaración de 1999 como Año Europeo de Lucha Contra la Violencia de Género, entre otros. Muy recientemente, la Decisión n.º 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008) para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne II), ha fijado la posición y estrategia de los representantes de la ciudadanía de la Unión al respecto. El ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta Ley regula. La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y

educación. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas tienen que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. La Ley establece medidas de sensibilización e intervención en el ámbito educativo. Se refuerza, con referencia concreta al ámbito de la publicidad, una imagen que respete la igualdad y la dignidad de las mujeres. Se apoya a las víctimas a través del reconocimiento de derechos como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social y apoyo económico. Proporciona por tanto una respuesta legal integral que abarca tanto las normas procesales, creando nuevas instancias, como normas sustantivas penales y civiles, incluyendo la debida formación de los operadores sanitarios, policiales y jurídicos responsables de la obtención de pruebas y de la aplicación de la ley. Se establecen igualmente medidas de sensibilización e intervención en el ámbito sanitario para optimizar la detección precoz y la atención física y psicológica de las víctimas, en coordinación con otras medidas de apoyo. Las situaciones de violencia sobre la mujer afectan también a los menores que se encuentran dentro de su entorno familiar, víctimas directas o indirectas de esta violencia. La Ley contempla también su protección no sólo para la tutela de los derechos de los menores, sino para garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer. La Ley se estructura en un título preliminar, cinco títulos, veinte disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. En el título preliminar se recogen las disposiciones generales de la Ley que se refieren a su objeto y principios rectores. En el título I se determinan las medidas de sensibilización, prevención y detección e intervención en diferentes ámbitos. En el educativo se especifican las obligaciones del sistema para la transmisión de valores de respeto a la dignidad de las mujeres y a la igualdad entre hombres y mujeres. El objetivo fundamental de la educación es el de proporcionar una formación integral que les permita conformar su propia identidad, así como construir una concepción de la realidad que integre a la vez el conocimiento y valoración ética de la misma. En la Educación Secundaria se incorpora la educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia de género como contenido curricular, incorporando en todos los Consejos Escolares un nuevo miembro que impulse medidas educativas a favor de la igualdad y contra la violencia sobre la mujer. En el campo de la publicidad, ésta habrá de respetar la dignidad de las mujeres y su derecho a una imagen no estereotipada, ni discriminatoria, tanto si se exhibe en los medios de comunicación públicos como en los privados. De otro lado, se modifica la acción de cesación o rectificación de la publicidad legitimando a las instituciones y asociaciones que trabajan a favor de la igualdad entre hombres y mujeres para su ejercicio. En el ámbito sanitario se contemplan actuaciones de detección precoz y apoyo asistencial a las víctimas, así como la aplicación de protocolos sanitarios ante las agresiones

derivadas de la violencia objeto de esta Ley, que se remitirán a los Tribunales correspondientes con objeto de agilizar el procedimiento judicial. Asimismo, se crea, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una Comisión encargada de apoyar técnicamente, coordinar y evaluar las medidas sanitarias establecidas en la Ley. En el título II, relativo a los derechos de las mujeres víctimas de violencia, en su capítulo 1, se garantiza el derecho de acceso a la información y a la asistencia social integrada, a través de servicios de atención permanente, urgente y con especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Con el fin de coadyuvar a la puesta en marcha de estos servicios, se dotará un Fondo al que podrán acceder las Comunidades Autónomas, de acuerdo con los criterios objetivos que se determinen en la respectiva Conferencia Sectorial. Asimismo, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, con el fin de garantizar a aquellas víctimas con recursos insuficientes para litigar una asistencia letrada en todos los procesos y procedimientos, relacionados con la violencia de género, en que sean parte, asumiendo una misma dirección letrada su asistencia en todos los procesos. Se extiende la medida a los perjudicados en caso de fallecimiento de la víctima. Se establecen, asimismo, medidas de protección en el ámbito social, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, para justificar las ausencias del puesto de trabajo de las víctimas de la violencia de género, posibilitar su movilidad geográfica, la suspensión con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. En idéntico sentido se prevén medidas de apoyo a las funcionarias públicas que sufran formas de violencia de las que combate esta Ley, modificando los preceptos correspondientes de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Se regulan, igualmente, medidas de apoyo económico, modificando el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, para que las víctimas de la violencia de género generen derecho a la situación legal de desempleo cuando resuelvan o suspendan voluntariamente su contrato de trabajo. Para garantizar a las víctimas de violencia de género que carezcan de recursos económicos unas ayudas sociales en aquellos supuestos en que se estime que la víctima debido a su edad, falta de preparación general especializada y circunstancias sociales no va a mejorar de forma sustancial su

empleabilidad, se prevé su incorporación al programa de acción específico creado al efecto para su inserción profesional. Estas ayudas, que se modularán en relación a la edad y responsabilidades familiares de la víctima, tienen como objetivo fundamental facilitarle unos recursos mínimos de subsistencia que le permitan independizarse del agresor; dichas ayudas serán compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y Contra la Libertad Sexual. En el título III, concerniente a la Tutela Institucional, se procede a la creación de dos órganos administrativos. En primer lugar, la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que corresponderá, entre otras funciones, proponer la política del Gobierno en relación con la violencia sobre la mujer y coordinar e impulsar todas las actuaciones que se realicen en dicha materia, que necesariamente habrán de comprender todas aquellas actuaciones que hagan efectiva la garantía de los derechos de las mujeres. También se crea el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, como un órgano colegiado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y que tendrá como principales funciones servir como centro de análisis de la situación y evolución de la violencia sobre la mujer, así como asesorar y colaborar con el Delegado en la elaboración de propuestas y medidas para erradicar este tipo de violencia. En su título IV la Ley introduce normas de naturaleza penal, mediante las que se pretende incluir, dentro de los tipos agravados de lesiones, uno específico que incremente la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido la esposa del autor, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. También se castigarán como delito las coacciones leves y las amenazas leves de cualquier clase cometidas contra las mujeres mencionadas con anterioridad. Para la ciudadanía, para los colectivos de mujeres y específicamente para aquellas que sufren este tipo de agresiones, la Ley quiere dar una respuesta firme y contundente y mostrar firmeza plasmándolas en tipos penales específicos. En el título V se establece la llamada Tutela Judicial para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia de género en las relaciones intrafamiliares. Desde el punto de vista judicial nos encontramos ante un fenómeno complejo en el que es necesario intervenir desde distintas perspectivas jurídicas, que tienen que abarcar desde las normas procesales y sustantivas hasta las disposiciones relativas a la atención a las víctimas, intervención que sólo es posible a través de una legislación específica. Una Ley para la prevención y erradicación de la violencia sobre la mujer ha de ser una Ley que recoja medidas procesales que permitan procedimientos ágiles y sumarios, como el establecido en la Ley 27/2003, de 31 de julio, pero, además, que compagine, en los ámbitos civil y penal, medidas de protección a las mujeres y a sus hijos e hijas, y medidas cautelares para ser ejecutadas con carácter de urgencia. La normativa actual, civil, penal, publicitaria, social y administrativa presenta muchas deficiencias, debidas fundamentalmente a que hasta el momento no se ha dado a esta cuestión una respuesta global y multidisciplinar. Desde el punto de vista penal la respuesta nunca puede ser un nuevo agravio para la mujer. En cuanto a las medidas jurídicas asumidas para garantizar un tratamiento adecuado y eficaz de la situación jurídica, familiar y social de las víctimas de violencia sobre la mujer en las relaciones intrafamiliares, se han adoptado las siguientes: conforme a la tradición jurídica española, se ha optado por una fórmula de especialización dentro del orden penal, de los Jueces de Instrucción, creando los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y excluyendo la posibilidad de creación de un orden jurisdiccional nuevo o la asunción de competencias penales por parte de los Jueces Civiles. Estos Juzgados conocerán de la instrucción, y, en su caso, del fallo de las causas penales en materia de violencia sobre la mujer, así como de aquellas causas civiles relacionadas, de forma que unas y otras en la primera instancia sean objeto de tratamiento procesal ante la misma sede. Con ello se asegura la mediación garantista del debido proceso penal en la intervención de los derechos fundamentales del presunto agresor, sin que con ello se reduzcan lo más mínimo las posibilidades legales que esta Ley dispone para la mayor, más inmediata y eficaz protección de la víctima, así como los recursos para evitar reiteraciones en la agresión o la escalada en la violencia. Respecto de la regulación expresa de las medidas de protección que podrá adoptar el Juez de Violencia sobre la Mujer, se ha optado por su inclusión expresa, ya que no están recogidas como medidas cautelares en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sólo regula la prohibición de residencia y la de acudir a determinado lugar para los delitos recogidos en el artículo 57 del Código Penal (artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducido por la Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995, en materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Además se opta por la delimitación temporal de estas medidas (cuando son medidas cautelares) hasta la finalización del proceso. Sin embargo, se añade la posibilidad de que cualquiera de estas medidas de protección pueda ser utilizada como medida de seguridad, desde el principio o durante la ejecución de la sentencia, incrementando con ello la lista del artículo 105 del Código Penal (modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), y

posibilitando al Juez la garantía de protección de las víctimas más allá de la finalización del proceso. Se contemplan normas que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, mediante la creación del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, encargado de la supervisión y coordinación del Ministerio Fiscal en este aspecto, así como mediante la creación de una Sección equivalente en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales a las que se adscribirán Fiscales con especialización en la materia. Los Fiscales intervendrán en los procedimientos penales por los hechos constitutivos de delitos o faltas cuya competencia esté atribuida a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, además de intervenir en los procesos civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre guarda y custodia de los hijos menores en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos.

En sus disposiciones adicionales la Ley lleva a cabo una profunda reforma del ordenamiento jurídico para adaptar las normas vigentes al marco introducido por el presente texto. Con objeto de armonizar las normas anteriores y ofrecer un contexto coordinado entre los textos legales, parte de la reforma integral se ha llevado a cabo mediante la modificación de normas existentes. En este sentido, las disposiciones adicionales desarrollan las medidas previstas en el articulado, pero integrándolas directamente en la legislación educativa, publicitaria, laboral, de Seguridad Social y de Función Pública; asimismo, dichas disposiciones afectan, en especial, al reconocimiento de pensiones y a la dotación del Fondo previsto en esta Ley para favorecer la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género. En materia de régimen transitorio se extiende la aplicación de la presente Ley a los procedimientos en tramitación en el momento de su entrada en vigor, aunque respetando la competencia judicial de los órganos respectivos. Por último, la presente Ley incluye en sus disposiciones finales las habilitaciones necesarias para el desarrollo normativo de sus preceptos.

TÍTULO PRELIMINAR

Objeto de la Ley (Art. 1)

La presente **Ley** tiene por objeto **actuar** contra la **violencia** que, como **manifestación de la discriminación**, la situación de **desigualdad** y las **relaciones de poder** de los **hombres** sobre las **mujeres**, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus **cónyuges** o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por **relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia**.

Por esta ley se establecen **medidas de protección integral** cuya finalidad es **prevenir, sancionar y erradicar** esta violencia y prestar **asistencia** a las **mujeres**, a sus **hijos menores** y a los **menores sujetos** a su **tutela**, o **guarda y custodia, víctimas** de esta **violencia**.

La **violencia de género** a que se refiere la presente Ley **comprende** todo **acto** de **violencia física** y **psicológica**, incluidas las **agresiones** a la **libertad sexual**, las **amenazas**, las **coacciones** o la **privación arbitraria de libertad**.

La violencia de género a que se refiere esta Ley también **comprende** la **violencia** que con el **objetivo** de **causar perjuicio o daño** a las **mujeres** se ejerza sobre sus **familiares** o allegados **menores de edad** por parte de las personas indicadas en el apartado primero.

Principios rectores (Art. 2)

A través de esta Ley se articula un **conjunto integral** de medidas encaminadas a **alcanzar** los siguientes fines:

Fortalecer las **medidas de sensibilización ciudadana de prevención**, **dotando** a los poderes públicos de **instrumentos eficaces** en el **ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático**.

Consagrar **derechos** de las **mujeres víctimas de violencia de género**, **exigibles** ante las **Administraciones Públicas**, y así asegurar un **acceso rápido, transparente y eficaz** a los **servicios establecidos** al efecto.

Reforzar hasta la **consecución** de los **mínimos exigidos** por los objetivos de la ley los **servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral**, así como establecer un sistema para la más eficaz **coordinación de los servicios** ya existentes a nivel **municipal y autonómico**.

Garantizar **derechos** en el ámbito **laboral y funcional** que **concilien** los **requerimientos** de la **relación laboral** y de **empleo público** con las circunstancias de aquellas **trabajadoras o funcionarias** que sufran violencia de género.

Garantizar **derechos económicos** para las **mujeres víctimas** de **violencia de género**, con el fin de **facilitar su integración social**.

Establecer un **sistema integral de tutela institucional** en el que la **Administración General del Estado**, a través de la **Delegación Especial del Gobierno** contra la **Violencia sobre la Mujer**, en colaboración con el **Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer**, impulse la **creación** de **políticas públicas** dirigidas a **ofrecer tutela** a las **víctimas de la violencia** contemplada en la presente Ley.

Fortalecer el **marco penal** y **procesal** vigente para **asegurar** una **protección integral**, desde las **instancias jurisdiccionales**, a las víctimas de violencia de género.

Coordinar los **recursos** e **instrumentos** de todo tipo de los **distintos poderes públicos** para asegurar la **prevención** de los **hechos de violencia de género** y, en su caso, la **sanción** adecuada a los **culpables** de los mismos.

Promover la **colaboración** y **participación** de las **entidades, asociaciones** y **organizaciones** que desde la **sociedad civil** actúan **contra la violencia de género**.

Fomentar la **especialización** de los **colectivos profesionales** que **intervienen** en el proceso de **información, atención** y **protección** a las víctimas.

Garantizar el **principio de transversalidad** de las **medidas**, de manera que en su **aplicación** se tengan en cuenta las **necesidades** y **demandas específicas** de todas las **mujeres víctimas** de violencia de género.

MEDIDAS DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN (Tít. 1)

Planes de sensibilización (Art. 3)

Desde la **responsabilidad** del **Gobierno del Estado** y de manera inmediata a la entrada en vigor de esta ley, con la consiguiente **dotación presupuestaria**, se pondrá en marcha un **Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género** con carácter **permanente** que como mínimo recoja los siguientes elementos:

Que **introduzca** en el **escenario social** las **nuevas escalas de valores** basadas en el **respeto** de los **derechos y libertades fundamentales** de la **igualdad** entre **hombres** y **mujeres**, así como en el ejercicio de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos de convivencia**, todo ello desde la **perspectiva** de las **relaciones de género**.

Dirigido tanto a **hombres** como a **mujeres**, desde un **trabajo comunitario** e **intercultural**, **incluyendo** el ámbito de las **tecnologías de la información** y el **digital**.

Que contemple un **amplio programa** de **formación complementaria** y de **reciclaje** de los **profesionales** que **intervienen** en estas situaciones.

Controlado por una **Comisión de amplia participación**, que se creará en un **plazo máximo** de **1 mes**, en la que se ha de **asegurar** la presencia de las **víctimas** y su **entorno**, las **instituciones**, los **profesionales** y de personas de reconocido **prestigio social** relacionado con el **tratamiento** de estos temas.

La **Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género**, oída la **Comisión** a la que se refiere el párrafo anterior, **elaborará** el **Informe anual de evaluación** del **Plan Estatal de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género** y lo remitirá a las **Cortes Generales**.

Los **poderes públicos**, en el **marco** de sus **competencias**, **impulsarán** además **campañas de información** y **sensibilización específicas** con el fin de **prevenir** la violencia de género.

Las **campañas** de **información** y **sensibilización** contra esta forma de violencia se **realizarán** de manera que se **garantice** el **acceso** a las mismas de las **personas con discapacidad**.

ÁMBITO EDUCATIVO (Cap. 1)

Principios y valores del sistema educativo (Art. 4)

El **sistema educativo español** incluirá entre sus fines la **formación** en el **respeto** de los **derechos** y **libertades fundamentales** y de la **igualdad** entre **hombres** y **mujeres**, así como en el **ejercicio** de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos de convivencia**.

Igualmente, el **sistema educativo español** incluirá, dentro de sus **principios de calidad**, la **eliminación** de los **obstáculos** que **dificultan** la plena **igualdad** entre **hombres** y **mujeres** y la **formación** para la **prevención de conflictos** y para la **resolución pacífica** de los mismos.

La **Educación Infantil** contribuirá a **desarrollar** en la infancia el **aprendizaje** en la **resolución pacífica de conflictos**.

La **Educación Primaria** contribuirá a **desarrollar** en el alumnado su **capacidad** para **adquirir habilidades** en la **resolución pacífica de conflictos** y para **comprender** y **respetar** la **igualdad** entre **sexos**.

La **Educación Secundaria Obligatoria** contribuirá a **desarrollar** en el alumnado la **capacidad** para **relacionarse** con los demás de forma **pacífica** y para **conocer**, **valorar** y **respetar** la **igualdad de oportunidades** de hombres y mujeres.

El **Bachillerato** y la **Formación Profesional** contribuirán a **desarrollar** en el alumnado la **capacidad** para **consolidar** su **madurez personal, social** y **moral**, que les permita actuar de forma **responsable** y **autónoma** y para **analizar** y **valorar** críticamente las **desigualdades** de **sexo** y **fomentar** la **igualdad real** y **efectiva** entre hombres y mujeres.

La **Enseñanza** para las personas **adultas** incluirá entre sus **objetivos** desarrollar **actividades** en la **resolución pacífica de conflictos** y fomentar el **respeto** a la **dignidad** de las personas y a la **igualdad** entre **hombres** y **mujeres**.

Las **Universidades** incluirán y **fomentarán** en todos los ámbitos **académicos** la **formación**, **docencia** e **investigación** en **igualdad de género** y **no discriminación** de forma **transversal**.

Escolarización inmediata en caso de violencia de género (Art. 5)

Las **Administraciones competentes** deberán **prever** la **escolarización inmediata** de los **hijos** que se vean **afectados** por un **cambio de residencia** derivada de **actos de violencia de género**.

Fomento de la igualdad (Art. 6)

Con el fin de **garantizar** la efectiva **igualdad** entre **hombres** y **mujeres**, las **Administraciones educativas** **velarán** para que en **todos** los **materiales educativos** se **eliminen** los **estereotipos sexistas** o **discriminatorios** y para que **fomenten** el **igual valor** de **hombres** y **mujeres**.

Formación inicial y permanente del profesorado (Art. 7)

Las **Administraciones educativas** adoptarán las **medidas** necesarias para que en los planes de **formación inicial** y **permanente** del profesorado se incluya una **formación específica** en materia de **igualdad**, con el fin de **asegurar** que **adquieren** los **conocimientos** y las **técnicas** necesarias que les **habiliten** para:

La **educación** en el **respeto** de los **derechos** y **libertades** fundamentales y de la **igualdad** entre **hombres** y **mujeres** y en el ejercicio de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos** de **convivencia**.

La **educación** en la **prevención de conflictos** y en la **resolución pacífica** de los mismos, en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar** y **social**.

La **detección precoz** de la **violencia** en el ámbito **familiar**, especialmente sobre la **mujer** y los **hijos** e **hijas**.

El **fomento** de **actitudes** encaminadas al ejercicio de **iguales derechos** y **obligaciones** por parte de **mujeres** y **hombres**, tanto en el ámbito **público** como **privado**, y la **corresponsabilidad** entre los mismos en el ámbito **doméstico**.

Participación en los Consejos Escolares (Art. 8)

Se **adoptarán** las medidas precisas para **asegurar** que los **Consejos Escolares** impulsen la adopción de **medidas educativas** que **fomenten** la **igualdad real** y **efectiva** entre **hombres** y **mujeres**. Con el mismo fin, en el **Consejo Escolar del Estado** se **asegurará** la **representación** del **Instituto de la Mujer** y de las organizaciones que **defiendan** los intereses de las mujeres, con **implantación** en todo el **territorio nacional**.

Actuación de la inspección educativa (Art. 9)

Los **servicios** de **inspección educativa** velarán por el **cumplimiento** y **aplicación** de los **principios** y **valores** recogidos en este capítulo en el **sistema educativo** destinados a **fomentar** la **igualdad real** entre **mujeres** y **hombres**.

ÁMBITO DE LA PUBLICIDAD Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (Cap. 2)

Publicidad ilícita (Art. 10)

De acuerdo con lo **establecido** en la Ley 34/1988, **General de Publicidad**, se considerará **ilícita** la publicidad que **utilice** la **imagen de la mujer** con carácter **vejatorio** o **discriminatorio**.

Medidas para asegurar el tratamiento de la mujer (Art. 11)

El **Ente público** al que corresponda **velar** para que los **medios audiovisuales** cumplan sus obligaciones **adoptará** las medidas que procedan para **asegurar** un tratamiento de la **mujer** conforme con los **principios** y **valores** constitucionales, **sin perjuicio** de las posibles **actuaciones** por parte de otras **entidades**.

Titulares de la acción de cesación y rectificación (Art. 12)

La **Delegación Especial del Gobierno** contra la **Violencia sobre la Mujer**, el **Instituto de la Mujer** u **órgano** equivalente de cada **Comunidad Autónoma**, el **Ministerio Fiscal** y las **Asociaciones** que tengan como **objetivo** único la **defensa** de los intereses de la mujer estarán **legitimados** para **ejercitar** ante los **Tribunales** la acción de **cesación** de **publicidad ilícita** por utilizar en forma **vejatoria** la imagen de la mujer, en los términos de la Ley 34/1988, **General de Publicidad**.

Medios de comunicación (Art. 13)

Las **Administraciones Públicas** velarán por el **cumplimiento estricto** de la **legislación** en lo relativo a la **protección** y **salvaguarda** de los **derechos fundamentales**, con **especial** atención a la **erradicación** de **conductas favorecedoras** de situaciones de **desigualdad** de las **mujeres** en todos los medios de **comunicación social**, de acuerdo con la **legislación vigente**.

La **Administración pública** promoverá acuerdos de **autorregulación** que, contando con **mecanismos** de **control preventivo** y de **resolución extrajudicial** de **controversias eficaces**, contribuyan al **cumplimiento** de la **legislación publicitaria**.

Difusión de informaciones y evitar la discriminación (Art. 14)

Los **medios de comunicación** fomentarán la **protección** y **salvaguarda** de la **igualdad** entre **hombre** y **mujer**, **evitando** toda **discriminación** entre ellos.

La **difusión** de **informaciones** relativas a la **violencia** sobre la mujer **garantizará**, con la correspondiente **objetividad informativa**, la **defensa** de los **derechos humanos**, la **libertad** y **dignidad** de las **mujeres víctimas** de violencia y de sus **hijos**. En particular, se tendrá **especial cuidado** en el tratamiento **gráfico** de las **informaciones**.

ÁMBITO SANITARIO (Cap. 3)

Sensibilización y formación (Art. 15)

Las **Administraciones sanitarias**, en el **seno** del **Consejo Interterritorial** del **Sistema Nacional de Salud**, promoverán e **impulsarán** actuaciones de los **profesionales sanitarios** para la **detección precoz** de la **violencia de género** y **propondrán** las medidas que **estimen** necesarias a fin de **optimizar** la **contribución** del **sector sanitario** en la **lucha contra** este tipo de violencia.

En particular, se **desarrollarán** programas de **sensibilización** y **formación** continuada del **personal sanitario** con el fin de **mejorar** e **impulsar** el **diagnóstico precoz**, la **asistencia** y la **rehabilitación** de la mujer en las situaciones de **violencia de género** a que se refiere esta Ley.

Las **Administraciones educativas** competentes **asegurarán** que en los ámbitos curriculares de las **licenciaturas** y **diplomaturas**, y en los programas de **especialización** de las **profesiones sociosanitarias**, se **incorporen** contenidos dirigidos a la **capacitación** para la **prevención**, la **detección precoz**, **intervención** y **apoyo** a las víctimas de esta forma de **violencia**.

En los **Planes Nacionales** de **Salud** que procedan se **contemplará** un apartado de **prevención** e **intervención integral** en violencia de género.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. (Art. 16)

En el seno del **Consejo Interterritorial** del **Sistema Nacional de Salud** se constituirá, en el **plazo** de **1 año** desde la **entrada** en vigor de la presente Ley, una **Comisión** contra la **Violencia de Género** que **apoye** técnicamente y oriente la **planificación** de las **medidas sanitarias** contempladas en este capítulo, **evalúe** y **proponga** las necesarias para la **aplicación** del **protocolo sanitario** y cualesquiera otras medidas que se estimen **precisas** para que el **sector sanitario** contribuya a la **erradicación** de esta forma de **violencia**.

La **Comisión contra la Violencia de Género** del **Consejo Interterritorial** del **Sistema Nacional de Salud** estará **compuesta** por **representantes** de todas las **Comunidades Autónomas** con **competencia** en la materia.

La **Comisión** emitirá un **informe** anual que será remitido al **Observatorio Estatal** de la **Violencia sobre la Mujer** y al **Pleno del Consejo Interterritorial**.

DERECHOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO (Tít. 2)

DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL Y A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA (Cap. 1)

Garantía de los derechos de las víctimas (Art. 17)

Todas las **mujeres víctimas** de **violencia de género** tienen **garantizados** los **derechos** reconocidos en esta ley, **sin** que pueda **existir discriminación** en el **acceso** a los mismos.

La **información**, la **asistencia social integral** y la **asistencia jurídica** a las **víctimas** de la violencia de género, en los **términos regulados** en este capítulo, **contribuyen** a hacer reales y **efectivos** sus **derechos constitucionales** a la **integridad física** y **moral**, a la **libertad** y **seguridad** y a la **igualdad** y **no discriminación** por razón de **sexo**.

Los **servicios de información** y **orientación**, **atención psicosocial inmediata**, **telefónica** y **en línea**, **asesoramiento jurídico 24 horas**, los **servicios de acogida** y **asistencia social integral**, consistentes en **orientación jurídica**, **psicológica** y **social** destinadas a las **víctimas** de **violencias contra las mujeres** tendrán carácter de **servicios esenciales**.

En caso de que **concurra** cualquier **situación** que **dificulte** el **acceso** o la **prestación** de tales **servicios**, las **administraciones públicas** competentes **adoptarán** las **medidas necesarias** para **garantizar** su **normal funcionamiento** y su **adaptación**, si fuera necesario, a las **necesidades específicas** de las **víctimas derivadas** de la **situación** de dicha **situación excepcional**.

Igualmente, se garantizará el **normal funcionamiento** y **prestación** del **sistema de seguimiento** por medios **telemáticos** del **cumplimiento** de las **medidas cautelares** y **penas de prohibición** de **aproximación** en materia de **violencia de género**.

Derecho a la información (Art. 18)

Las **mujeres víctimas** de violencia de género tienen **derecho** a **recibir** plena **información** y **asesoramiento adecuado** a su **situación personal**, **sin** que pueda **existir discriminación** en el **acceso** a los mismos, a través de los **servicios**, **organismos** u **oficinas** que puedan **disponer** las **administraciones públicas**.

Dicha información comprenderá las **medidas contempladas** en esta ley relativas a su **protección y seguridad**, y los **derechos y ayudas previstos** en la misma, así como la **referente** al lugar de **prestación** de los **servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral**.

Se **garantizará**, a través de los **medios necesarios**, que las **mujeres con discapacidad** víctimas de violencia de género tengan **acceso integral** a la **información** sobre sus **derechos** y sobre los **recursos existentes**. Esta información deberá ofrecerse en **formato accesible** y **comprensible** a las personas con **discapacidad**, tales como **lengua de signos** u otras **modalidades u opciones de comunicación**, incluidos los **sistemas alternativos y aumentativos**.

Asimismo, se **articularán** los **medios necesarios** para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus **circunstancias personales y sociales** puedan tener una **mayor dificultad** para el **acceso integral** a la información, tengan garantizado el **ejercicio efectivo** de este **derecho**. La **información** deberá ser **accesible** para las **mujeres** que **desconozcan** el **castellano** o, en su caso, la otra **lengua oficial** de su **territorio de residencia**.

Derecho a la atención integral (Art. 19)

Las **mujeres víctimas** de violencia de género tienen **derecho** a **servicios sociales de atención**, de **emergencia**, de **apoyo y acogida** y de **recuperación integral**. La **organización** de estos **servicios** por parte de las comunidades **autónomas** y las **Corporaciones Locales** responderá a los **principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional**.

La **atención multidisciplinar** implicará especialmente:

- **Información** a las **víctimas**.
- **Atención psicológica**.
- **Apoyo social**.
- **Seguimiento** de las **reclamaciones** de los **derechos** de la **mujer**.
- **Apoyo educativo** a la **unidad familiar**.
- **Formación preventiva** en los valores de **igualdad** dirigida a su **desarrollo personal** y a la **adquisición de habilidades** en la **resolución no violenta** de **conflictos**.
- **Apoyo** a la **formación e inserción laboral**.

Los **servicios** adoptarán fórmulas **organizativas** que, por la **especialización** de su **personal**, por sus características de **convergencia e integración de acciones**, garanticen la **efectividad** de los indicados **principios**, asegurando, en todo caso, la **disponibilidad, accesibilidad y calidad** de los mismos. En todo caso, se procurará una **distribución territorial equitativa** de los **servicios** y se garantizará su **accesibilidad** a las mujeres de las **zonas rurales** y otras **zonas alejadas**.

Estos servicios actuarán **coordinadamente** y en **colaboración** con los **Cuerpos de Seguridad**, los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, los **servicios sanitarios** y las instituciones encargadas de prestar **asistencia jurídica** a las víctimas del **ámbito geográfico** correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al **órgano judicial** las medidas **urgentes** que consideren necesarias.

También tendrán **derecho** a la **asistencia social integral** a través de estos **servicios sociales** los **menores** que se encuentren bajo la **patria potestad o guarda y custodia** de la **persona agredida**, o convivan en **contextos familiares** en los que se **cometen** actos de violencia de género. A estos efectos, los **servicios sociales** deberán contar con **personal** específicamente formado para **atender** a los **menores**, con el fin de **prevenir y evitar** de forma **eficaz** las situaciones que puedan **comportar daños psíquicos y físicos** a los menores que viven en **entornos familiares** donde existe violencia de género. En particular, deberán contar con **profesionales** de la **psicología infantil** para la **atención** de las **hijas e hijos menores** víctimas de violencia de género, incluida la **violencia vicaria**.

En los **instrumentos y procedimientos** de cooperación entre la **Administración General del Estado** y la **Administración** de las **comunidades autónomas** en las materias reguladas en este artículo, se incluirán

compromisos de **aportación**, por parte de la **Administración General del Estado**, de **recursos financieros** referidos específicamente a la **prestación** de los **servicios**.

Los **organismos** de **igualdad orientarán** y valorarán los **programas** y **acciones** que se lleven a cabo y emitirán **recomendaciones** para su **mejora**.

Derecho a la atención sanitaria (Art. 19 bis)

El **Sistema Público** de **Salud** **garantizará** a las mujeres víctimas de violencia de género, así como a sus hijos e hijas, el **derecho** a la **atención sanitaria**, con **especial atención psicológica y psiquiátrica**, y al **seguimiento** de la **evolución** de su **estado de salud** hasta su total **recuperación**, en lo concerniente a la **sintomatología** o las **secuelas psíquicas y físicas** derivadas de la situación de **violencia sufrida**. Asimismo, los **servicios sanitarios** deberán **contar** con **psicólogos infantiles** para la **atención** de los **hijos e hijas menores** que sean víctimas de **violencia vicaria**.

Estos servicios se prestarán, **garantizando** la **privacidad** y la **intimidad** de las mujeres y el **respeto**, en todo caso, a las **decisiones** que ellas tomen en relación a su **atención sanitaria**.

Asimismo, se **establecerán medidas específicas** para la **detección, intervención y asistencia** en situaciones de violencia contra mujeres con **discapacidad**, mujeres con **problemas de salud mental, adicciones** u otras **problemáticas** u otros casos de **adicciones** derivadas o añadidas a la violencia.

Asistencia jurídica (Art. 20)

Las **víctimas** de violencia de género tienen **derecho** a recibir **asesoramiento jurídico gratuito** en el momento **inmediatamente** previo a la **interposición** de la **denuncia**, y a la **defensa** y **representación gratuitas** por **abogado** y **procurador** en todos los **procesos** y **procedimientos administrativos** que tengan **causa directa** o **indirecta** en la **violencia padecida**. En estos supuestos, una misma dirección letrada deberá **asumir** la **defensa** de la **víctima**, siempre que con ello se **garantice** debidamente su **derecho de defensa**. Este derecho **asistirá** también a los **causahabientes** en caso de **fallecimiento** de la víctima, siempre que no fueran **partícipes** en los **hechos**. En todo caso, se **garantizará** la **defensa jurídica, gratuita y especializada** de forma **inmediata** a todas las **víctimas de violencia de género** que lo **soliciten**.

En todo caso, cuando se trate de **garantizar** la **defensa** y **asistencia jurídica** a las víctimas de violencia de género, se procederá de **conformidad** con lo dispuesto en la **Ley 1/1996**, de 10 enero, de **Asistencia Jurídica Gratuita**.

Los **Colegios de Abogados**, cuando **exijan** para el ejercicio del **turno de oficio** cursos de **especialización**, asegurarán una **formación específica** que **coadyuve** al ejercicio profesional de una **defensa eficaz** en materia de **violencia de género**.

Igualmente, los **Colegios de Abogados** adoptarán las **medidas** necesarias para la **designación urgente** de **letrado** o **letrada de oficio** en los **procedimientos** que se sigan por violencia de género y para **asegurar** su **inmediata presencia** y **asistencia** a las **víctimas**.

Los **Colegios de Procuradores** adoptarán las medidas necesarias para la **designación urgente** de **procurador** o **procuradora** en los **procedimientos** que se sigan por **violencia de género** cuando la **víctima** desee **personarse** como **acusación particular**.

El **abogado** o **abogada designado** para la víctima tendrá también **habilitación legal** para la **representación procesal** de aquella hasta la **designación del procurador** o **procuradora**, en tanto la víctima no se haya **personado** como **acusación** conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente. Hasta entonces **cumplirá** el **abogado** o **abogada** el **deber de señalamiento de domicilio** a efectos de **notificaciones** y **traslados de documentos**.

Las **víctimas** de violencia de género podrán **personarse** como **acusación particular** en cualquier **momento** del **procedimiento** si bien ello no **permitirá retrotraer** ni **reiterar** las **actuaciones** ya practicadas antes de su **personación**, ni **podrá** suponer una **merma del derecho de defensa del acusado**.

DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL (Cap. 2)

Derechos laborales y de Seguridad Social (Art. 21)

La trabajadora víctima de violencia de género **tendrá derecho**, en los **términos** previstos en el **Estatuto de los Trabajadores**, a la **reducción** o a la **reordenación** de su **tiempo de trabajo**, a la **movilidad geográfica**, al **cambio de centro de trabajo**, a la **adaptación** de su **puesto de trabajo** y a los **apoyos** que **precise** por razón de su **discapacidad** para su **reincorporación**, a la **suspensión** de la **relación laboral** con reserva de **puesto de trabajo** y a la **extinción** del **contrato de trabajo**.

En los términos previstos en la **Ley General de la Seguridad Social** y en la **Ley Orgánica 4/2000**, de 11 de enero, sobre **derechos y libertades** de los **extranjeros en España** y su **integración social**, la **suspensión** y la **extinción** del **contrato de trabajo** previstas en el apartado anterior darán lugar a **situación legal de desempleo**. El **tiempo de suspensión** se considerará como **periodo de cotización** efectiva a efectos de **prestaciones de Seguridad Social** y de **desempleo**.

Las **empresas** que **formalicen** contratos de **interinidad**, para **sustituir** a **trabajadoras víctimas** de violencia de género que hayan **suspendido** su **contrato de trabajo** o **ejercitado** su **derecho** a la **movilidad geográfica** o al **cambio de centro de trabajo**, tendrán **derecho** a una **bonificación** del **100 por 100** de las **cuotas empresariales** a la **Seguridad Social** por **contingencias comunes**, durante todo el **periodo de suspensión** de la trabajadora sustituida o durante **6 meses** en los supuestos de **movilidad geográfica** o **cambio de centro de trabajo**. Cuando se produzca la **reincorporación**, ésta se realizará en las **mismas condiciones** existentes en el momento de la **suspensión** del contrato de trabajo, **garantizándose** los **ajustes razonables** que se puedan precisar por razón de **discapacidad**.

Las **ausencias** o **faltas de puntualidad** al trabajo motivadas por la **situación física** o **psicológica** derivada de la **violencia de género** se considerarán **justificadas** y serán **remuneradas**, cuando así lo **determinen** los **servicios sociales de atención** o **servicios de salud**, según proceda, **sin perjuicio** de que dichas **ausencias** sean **comunicadas** por la **trabajadora** a la empresa a la **mayor brevedad**.

A las **trabajadoras** por cuenta propia **víctimas** de **violencia de género** que **cesen** en su **actividad** para hacer efectiva su **protección** o su **derecho** a la **asistencia social integral**, se les **considerará** en **situación de cese temporal** de la actividad en los **términos previstos** en el texto refundido de la **Ley General de la Seguridad Social**, aprobado por el **Real Decreto Legislativo 8/2015**, de 30 de octubre, y se les **suspenderá** la **obligación de cotización** durante un período de **6 meses**, que les serán considerados como de **cotización efectiva** a efectos de las **prestaciones de Seguridad Social**. Asimismo, su situación será **considerada** como **asimilada al alta**.

A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se tomará una **base de cotización equivalente** al **promedio** de las **bases cotizadas** durante los **6 meses** previos a la **suspensión** de la **obligación de cotizar**.

Programa específico de empleo (Art. 22)

En el **marco** de los **planes anuales de empleo** a los que se refiere el artículo 11 del texto **refundido** de la **Ley de Empleo**, aprobado por **Real Decreto Legislativo 3/2015**, de 23 de octubre, se **desarrollará** un **programa de acción específico** para las **víctimas** de violencia de género **inscritas** como **demandantes de empleo**.

Este **programa** incluirá **medidas** para **favorecer** el **inicio** de una **nueva actividad** por **cuenta propia**.

Acreditación de situaciones de violencia de género (Art. 23)

Las **situaciones** de violencia de género que dan lugar al **reconocimiento** de los **derechos regulados** en esta ley se **acreditarán** mediante una **sentencia condenatoria** por **cualquiera** de las **manifestaciones** de la violencia **contra** las mujeres **previstas** en esta ley, una **orden de protección** o **cualquier** otra **resolución judicial** que **acuerde** una **medida cautelar** a favor de la víctima, o bien por el **informe** del **Ministerio Fiscal** que indique la **existencia** de indicios de que la **demandante** es víctima de violencia de género. También podrán **acreditarse** las situaciones de **violencia** contra las mujeres mediante **informe** de los **servicios sociales**, de los **servicios especializados**, o de los **servicios de acogida** de la **Administración Pública** competente **destinados** a las víctimas de violencia de género, o por **cualquier** otro **título**, siempre que ello

esté **previsto** en las **disposiciones normativas** de **carácter sectorial** que **regulen** el acceso a cada uno de los **derechos** y **recursos**.

En el caso de **víctimas menores** de **edad**, la **acreditación** podrá realizarse, además, por **documentos sanitarios oficiales** de **comunicación** a la **Fiscalía** o al **órgano judicial**.

El **Gobierno** y las **comunidades autónomas**, en el **marco** de la **Conferencia Sectorial** de **Igualdad**, **diseñarán**, de común acuerdo, los **procedimientos básicos** que **permitan** poner en **marcha** los **sistemas de acreditación** de las **situaciones** de **violencia de género**.

DERECHOS DE LAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS (Cap. 3)

Ámbito de los derechos (Art. 24)

La **funcionaria víctima** de violencia de género tendrá **derecho** a la **reducción** o a la reordenación de su **tiempo de trabajo**, a la **movilidad geográfica** de **centro** de **trabajo** y a la **excedencia** en los **términos** que se **determinen** en su **legislación específica**.

Justificación de las faltas de asistencia (Art. 25)

Las **ausencias totales** o **parciales** al trabajo motivadas por la **situación física** o **psicológica** derivada de la **violencia de género** sufrida por una mujer **funcionaria** se considerarán **justificadas** en los términos que se determine en su **legislación específica**.

Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias (Art. 26)

La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia, y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos establecidos en el artículo 23.

DERECHOS ECONÓMICOS (Cap. 4)

Ayudas sociales (Art. 27)

Cuando las **víctimas de violencia** de **género** careciesen de **rentas superiores**, en cómputo mensual, al 75 por 100 del **salario mínimo interprofesional**, excluida la parte proporcional de **2 pagas** extraordinarias, **recibirán** una **ayuda** de **pago único**, siempre que se presuma que debido a su **edad**, **falta** de **preparación general** o **especializada** y **circunstancias sociales**, la víctima tendrá **especiales dificultades** para **obtener** un **empleo** y por dicha circunstancia **no participará** en los **programas** de empleo establecidos para su **inserción profesional**.

El **importe** de esta ayuda será **equivalente** al de **6 meses** de **subsidio** por **desempleo**. Cuando la víctima de la violencia **ejercida** contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una **discapacidad** en grado **igual** o **superior** al 33 por 100, el **importe** será **equivalente** a **12 meses** de **subsidio** por **desempleo**.

Estas ayudas, **financiadas** con **cargo** a los **Presupuestos Generales del Estado**, serán concedidas por las **Administraciones competentes** en materia de **servicios sociales**. En la **tramitación** del procedimiento de **concesión**, deberá **incorporarse informe** del **Servicio Público de Empleo** referido a la **previsibilidad** de que por las **circunstancias** a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la **aplicación** del **programa** de **empleo** no incida de forma **sustancial** en la mejora de la **empleabilidad** de la víctima.

La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta Ley.

En el caso de que la víctima tenga **responsabilidades familiares**, su **importe** podrá alcanzar el de un **período equivalente** al de **18 meses** de **subsidio**, o de **24 meses** si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene **reconocida oficialmente** una **minusvalía** en **grado igual** o **superior** al **33** por **100**, en los términos que **establezcan** las disposiciones de **desarrollo** de la presente Ley.

Estas ayudas serán **compatibles** con cualquiera de las **previstas** en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de **Ayudas y Asistencia** a las **Víctimas de Delitos Violentos** y contra la **Libertad Sexual**, así como con cualquier otra **ayuda económica** de carácter **autonómico** o **local** concedida por la situación de violencia de género.

Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores (Art. 28)

Las **mujeres víctimas** de **violencia de género** serán consideradas **colectivos prioritarios** en el acceso a **viviendas protegidas** y **residencias públicas para mayores**, en los términos que determine la legislación aplicable.

DERECHO A LA REPARACIÓN (Cap. 5)

Artículo 28 bis. Alcance y garantía del derecho (Art. 28 bis)

Las víctimas de violencia de género tienen **derecho** a la **reparación**, lo que comprende la **compensación económica** por los **daños** y **perjuicios** derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa **recuperación física, psíquica y social**, las acciones de **reparación simbólica** y las **garantías de no repetición**.

Medidas para garantizar el derecho a la reparación (Art. 28 ter)

Las víctimas de violencia de género tienen **derecho** a la **reparación**, lo que comprende la **indemnización** a la que se refiere el apartado siguiente, las **medidas necesarias** para su **completa recuperación física, psíquica y social**, las acciones de **reparación simbólica** y las garantías de **no repetición**.

Las **administraciones públicas** asegurarán que las víctimas tengan **acceso efectivo** a la **indemnización** que **corresponda** por los **daños** y **perjuicios**, que deberá **garantizar** la satisfacción **económicamente evaluable** de, al menos, los siguientes conceptos:

El **daño físico** y **psicológico**, incluido el **daño moral** y el daño a la **dignidad**.

La **pérdida de oportunidades**, incluidas las oportunidades de **educación, empleo y prestaciones sociales**.

Los **daños materiales** y la **pérdida de ingresos**, incluido el **lucro cesante**.

El **daño social**, entendido como el **daño al proyecto de vida**.

El **tratamiento terapéutico, social** y de **salud sexual y reproductiva**.

La **indemnización** será **satisfecha** por la o las personas **civil** o **penalmente responsables**, de acuerdo con la **normativa vigente**.

Las **administraciones públicas** garantizarán la completa **recuperación física, psíquica y social** de las víctimas a través de la **red de recursos de atención integral** previstos en el Título II. Asimismo, con el **objetivo** de **garantizar** la **recuperación simbólica**, promoverán el restablecimiento de su **dignidad y reputación**, la **superación** de cualquier situación de **estigmatización** y el **derecho** de **supresión** aplicado a buscadores en Internet y **medios de difusión públicos**.

Asimismo, las **administraciones públicas** podrán establecer **ayudas complementarias** destinadas a las víctimas que, por la **especificidad** o **gravedad** de las **secuelas** derivadas de la violencia, no encuentren una **respuesta adecuada** o **suficiente** en la red de **recursos de atención y recuperación**. En particular, dichas víctimas podrán recibir **ayudas adicionales** para **financiar** los **tratamientos sanitarios** adecuados, incluyendo los tratamientos de **reconstrucción genital femenina**, si fueran necesarios.

Con el **objetivo** de cumplir las **garantías de no repetición**, las **administraciones públicas**, en el marco de sus respectivas **competencias**, impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con **protección efectiva** ante **represalias** o **amenazas**.

Las **administraciones públicas** promoverán, a través de **homenajes** y de **acciones de difusión pública**, el **compromiso colectivo** frente a la **violencia** contra las mujeres y el **respeto** por las víctimas.

TUTELA INSTITUCIONAL (Tít. 3)

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (Art. 29)

La **Delegación** del **Gobierno** contra la **Violencia de Género**, adscrita al **Ministerio de Igualdad** o al **departamento** con **competencias** en la materia, **formulará** las **políticas públicas** en relación con la **violencia de género** a desarrollar por el **Gobierno** y elaborará la **Macroencuesta** de **Violencia** contra las **Mujeres**. Asimismo, **coordinará** e **impulsará** cuantas acciones se realicen en dicha materia, trabajando en **colaboración** y **coordinación** con las administraciones con competencia en la materia.

La persona **titular** de la **Delegación** del **Gobierno** contra la **Violencia de Género** estará legitimada ante los **órganos jurisdiccionales** para **intervenir** en **defensa** de los **derechos** y de los **intereses** tutelados en esta ley en **colaboración** y **coordinación** con las administraciones con competencias en la materia.

Reglamentariamente se **determinará** el **rango** y las **funciones** concretas de la **persona titular** de la **Delegación** del **Gobierno** contra la **Violencia de Género**.

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (Art. 30)

Se constituirá el **Observatorio Estatal** de **Violencia** sobre la **Mujer**, como **órgano colegiado** adscrito al **Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales**, al que corresponderá el **asesoramiento**, **evaluación**, **colaboración institucional**, elaboración de **informes** y **estudios**, y **propuestas** de actuación en materia de violencia de género. Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma **especial** la situación de las mujeres con **mayor riesgo** de sufrir **violencia de género** o con **mayores dificultades** para **acceder** a los **servicios**. En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán **desagregados** por **sexo**.

El **Observatorio Estatal** de **Violencia sobre la Mujer** remitirá al **Gobierno** y a las **Comunidades Autónomas**, con **periodicidad anual**, un informe sobre la **evolución** de la violencia ejercida sobre la mujer en los **términos** a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley, con **determinación** de los **tipos penales** que se hayan **aplicado**, y de la **efectividad** de las medidas acordadas para la **protección** de las víctimas. El **informe** destacará asimismo las **necesidades** de **reforma legal** con **objeto** de garantizar que la **aplicación** de las **medidas de protección** adoptadas puedan **asegurar** el **máximo nivel de tutela** para las mujeres.

Reglamentariamente se **determinarán** sus **funciones**, su **régimen** de **funcionamiento** y su **composición**, en la que se garantizará, en todo caso, la **participación** de las **Comunidades Autónomas**, las **entidades locales**, los **agentes sociales**, las **asociaciones** de **consumidores** y **usuarios**, y las **organizaciones** de **mujeres** con **implantación** en todo el **territorio del Estado** así como de las organizaciones **empresariales** y **sindicales** más representativas.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. (Art. 31)

El **Gobierno** establecerá, en las **Fuerzas y Cuerpos** de **Seguridad** del **Estado**, **unidades especializadas** en la **prevención** de la **violencia de género** y en el **control** de la **ejecución** de las medidas **judiciales adoptadas**.

El **Gobierno**, con el fin de hacer más **efectiva** la **protección** de las víctimas, **promoverá** las **actuaciones necesarias** para que las **Policías Locales**, en el marco de su colaboración con las **Fuerzas y Cuerpos** de **Seguridad** del **Estado**, cooperen en **asegurar** el **cumplimiento** de las medidas acordadas por los **órganos judiciales** cuando éstas sean algunas de las **previstas** en la presente **Ley** o en el artículo 544 bis de la **Ley de Enjuiciamiento Criminal** o en el artículo 57 del **Código Penal**.

La **actuación** de las **Fuerzas y Cuerpos** de **Seguridad** habrá de tener en cuenta el **Protocolo de Actuación** de las **Fuerzas y Cuerpos** de **Seguridad** y de **Coordinación** con los **Órganos Judiciales** para la **protección** de la **violencia doméstica** y de **género**.

Lo **dispuesto** en el presente artículo será de **aplicación** en las **Comunidades Autónomas** que cuenten con **cuerpos de policía** que **desarrollen** las funciones de **protección** de las **personas** y **bienes** y el **mantenimiento** del **orden** y la **seguridad ciudadana** dentro del **territorio autónomo**, en los términos previstos en sus **Estatutos**, en la **Ley Orgánica 2/1986**, de 13 de marzo, de **Fuerzas y Cuerpos** de **Seguridad**, y en sus **leyes de policía**, y todo ello con la finalidad de hacer **más efectiva** la **protección** de las **víctimas**.

Planes de colaboración (Art. 32)

Los **poderes públicos** elaborarán planes de **colaboración** que garanticen la **ordenación** de sus **actuaciones** en la **prevención, asistencia y persecución** de los **actos de violencia de género**, que deberán implicar a las **administraciones sanitarias**, la **Administración de Justicia**, las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** y los **servicios sociales y organismos de igualdad**.

En **desarrollo** de dichos planes, se **articularán protocolos de actuación** que determinen los **procedimientos** que aseguren una **actuación global e integral** de las distintas **administraciones y servicios** implicados, y que **garanticen la actividad probatoria** en los **procesos** que se sigan.

Las **administraciones con competencias sanitarias** promoverán la **aplicación, permanente actualización y difusión** de **protocolos** que contengan **pautas uniformes de actuación sanitaria**, tanto en el **ámbito público** como **privado**, y en especial, del **Protocolo** aprobado por el **Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud**.

Tales **protocolos** impulsarán las **actividades de prevención, detección precoz e intervención** continuada con la **mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla**.

Los **protocolos**, además de referirse a los **procedimientos** a seguir, harán **referencia expresa** a las **relaciones** con la **Administración de Justicia**, en aquellos casos en que **exista constatación o sospecha** fundada de **daños físicos o psíquicos** ocasionados por estas **agresiones o abusos**.

En las **actuaciones** previstas en este artículo se **considerará** de forma **especial** la situación de las mujeres que, por sus circunstancias **personales y sociales** puedan tener **mayor riesgo** de **sufrir** la violencia de género o **mayores dificultades** para **acceder** a los **servicios** previstos en esta ley, tales como las pertenecientes a **minorías**, las **inmigrantes**, las que se encuentran en situación de **exclusión social**, las mujeres con **discapacidad**, las mujeres **mayores** o aquellas que viven en el **ámbito rural**.

TUTELA PENAL (Tít. 4)

Suspensión de penas (Art. 33)

El párrafo segundo del apartado 1, 6.ª, del artículo 83 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:

«Si se tratase de **delitos** relacionados con la violencia de género, el **Juez o Tribunal** condicionará en todo caso la **suspensión al cumplimiento** de las **obligaciones o deberes** previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª de este apartado.»

Comisión de delitos durante el período de suspensión de la pena (Art. 34)

El apartado 3 del artículo 84 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:

«3. En el **supuesto** de que la **pena suspendida** fuera de **prisión** por la **comisión de delitos** relacionados con la violencia de género, el **incumplimiento** por parte del **reo** de las **obligaciones o deberes** previstos en las reglas 1ª, 2ª y 5ª del apartado 1 del artículo 83 determinará la **revocación** de la **suspensión** de la **ejecución de la pena**.»

Sustitución de penas (Art. 35)

El párrafo tercero del apartado 1 del artículo 88 del Código Penal, en la redacción dada por la Ley Orgánica 15/2003, queda redactado de la forma siguiente:

«En el caso de que el **reo** hubiera sido **condenado** por un **delito** relacionado con la violencia de género, la **pena de prisión** sólo podrá ser **sustituída** por la de **trabajos en beneficio de la comunidad**. En estos supuestos, el **Juez o Tribunal** impondrá **adicionalmente**, además de la **sujeción a programas** específicos de **reeducción y tratamiento psicológico**, la **observancia** de las **obligaciones o deberes** previstos en las reglas 1ª y 2ª, del apartado 1 del art. 83 de este Código.»

Protección contra las lesiones (Art. 36)

Se modifica el artículo 148 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma:

«Las **lesiones** previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser **castigadas** con la **pena de prisión de 2 a 5 años**, atendiendo al **resultado causado** o **riesgo** producido:

- Si en la **agresión** se hubieren utilizado **armas, instrumentos, objetos, medios, métodos** o formas concretamente **peligrosas** para la **vida** o **salud, física** o **psíquica**, del lesionado.
- Si hubiere mediado **ensañamiento** o **alevosía**.
- Si la víctima fuere **menor** de **12 años** o **incapaz**.
- Si la víctima fuere o hubiere sido **esposa**, o **mujer** que estuviere o hubiere estado **ligada** al **autor** por una análoga **relación** de **afectividad**, aun **sin convivencia**.
- Si la víctima fuera una **persona especialmente vulnerable** que **conviva** con el **autor**.»

Protección contra los malos tratos (Art. 37)

El artículo 153 del Código Penal, queda redactado como sigue:

«1. El que por cualquier medio o procedimiento **causare** a otro **menoscabo psíquico** o una **lesión no definidos** como **delito** en este **Código**, o **golpear** o **maltratar** de **obra** a otro sin causarle **lesión**, cuando la **ofendida** sea o haya sido **esposa**, o **mujer** que esté o haya estado ligada a él por una análoga **relación** de **afectividad** aun **sin convivencia**, o persona especialmente **vulnerable** que **conviva** con el **autor**, será **castigado** con la **pena de prisión de 6 meses a 1 año** o de **trabajos en beneficios** de la **comunidad de 31 a 80 días** y, en todo caso, **privación del derecho** a la **tenencia** y **porte** de **armas** de un **1 año y 1 día a 3 años**, así como, cuando el **Juez** o **Tribunal** lo estime adecuado al interés del **menor** o **incapaz**, **inhabilitación** para el ejercicio de la **patria potestad, tutela, curatela, guarda** o **acogimiento** hasta **5 años**.

Si la víctima del **delito** previsto en el **apartado anterior** fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2, **exceptuadas** las personas **contempladas** en el apartado anterior de este artículo, el autor será **castigado** con la **pena de prisión de 3 meses a 1 año** o de **trabajos en beneficio** de la **comunidad de 31 a 80 días** y, en todo caso, **privación del derecho** a la **tenencia** y **porte** de **armas** de **1 año y 1 día a 3 años**, así como, cuando el **Juez** o **Tribunal** lo estime adecuado al interés del **menor** o **incapaz**, **inhabilitación** para el ejercicio de la **patria potestad, tutela, curatela, guarda** o **acogimiento** de **6 meses a 3 años**.

Las penas previstas en los apartados 1 y 2 se **impondrán** en su **mitad superior** cuando el delito se **perpetre** en **presencia** de **menores**, o **utilizando armas**, o tenga lugar en el **domicilio común** o en el **domicilio** de la **víctima**, o se realice **quebrantando** una **pena** de las **contempladas** en el artículo 48 de este **Código** o una medida **cautelar** o de **seguridad** de la misma **naturaleza**.

No obstante lo **previsto** en los apartados anteriores, el **Juez** o **Tribunal**, **razonándolo** en **sentencia**, en **atención** a las circunstancias **personales** del **autor** y las **concurrentes** en la **realización** del **hecho**, podrá **imponer** la **pena inferior en grado**.»

Protección contra las amenazas (Art. 38)

Se añaden tres apartados, numerados como 4, 5 y 6, al artículo 171 del Código Penal, que tendrán la siguiente redacción:

«4. El que de modo **leve amenace** a quien **sea** o **haya sido** su **esposa**, o **mujer** que esté o haya estado **ligada** a **él** por una análoga **relación** de **afectividad** aun **sin convivencia**, será **castigado** con la **pena de prisión de 6 meses a 1 año** o de **trabajos en beneficio** de la **comunidad de 31 a 80 días** y, en todo caso, **privación del derecho** a la **tenencia** y **porte** de **armas** de **1 año y 1 día a 3 años**, así como, cuando el **Juez** o **Tribunal** lo estime adecuado al interés del **menor** o **incapaz**, **inhabilitación** para el ejercicio de la **patria potestad, tutela, curatela, guarda** o **acogimiento** de **6 meses a 3 años**.

Igual pena se **impondrá** al que de modo **leve amenace** a una persona especialmente **vulnerable** que conviva con el **autor**.

El que de modo **leve amenace** con **armas** u otros **instrumentos peligrosos** a alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, exceptuadas las contempladas en el apartado anterior de este artículo, será **castigado** con la **pena de prisión de 3 meses a 1 año** o trabajos en **beneficio** de la comunidad de **31 a 80 días** y, en todo caso, **privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años**, así como, cuando el **Juez o Tribunal** lo estime adecuado al interés del **menor o incapaz, inhabilitación** para el ejercicio de la **patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años**.

Se **impondrán** las penas **previstas** en los apartados 4 y 5, en su **mitad superior** cuando el delito se **perpetre** en **presencia** de **menores**, o tenga lugar en el **domicilio común** o en el **domicilio** de la **víctima**, o se realice **quebrantando** una **pena** de las contempladas en el artículo 48 de este **Código** o una **medida cautelar** o de **seguridad** de la misma **naturaleza**.

No obstante lo previsto en los apartados 4 y 5, el Juez o Tribunal, **razonándolo en sentencia**, en atención a las **circunstancias personales** del **autor** y a las **concurrentes** en la realización del **hecho**, podrá **imponer** la pena **inferior en grado**.»

Protección contra las coacciones (Art. 39)

El contenido actual del artículo 172 del Código Penal queda numerado como apartado 1 y se añade un apartado 2 a dicho artículo con la siguiente redacción:

«2. El que de modo **leve coaccione** a quien sea o haya sido su **esposa**, o **mujer** que esté o haya estado **ligada** a él por una análoga **relación de afectividad**, aun **sin convivencia**, será **castigado** con la **pena de prisión de 6 meses a 1 año** o de trabajos en **beneficio** de la comunidad de **31 a 80 días** y, en todo caso, **privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años**, así como, cuando el **Juez o Tribunal** lo estime adecuado al interés del **menor o incapaz, inhabilitación** para el ejercicio de la **patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento de 6 meses a 3 años**.

Igual pena se **impondrá** al que de modo **leve coaccione** a una persona especialmente **vulnerable** que conviva con el autor.

Se **impondrá** la pena en su **mitad superior** cuando el delito se perpetre en **presencia** de **menores**, o tenga lugar en el **domicilio común** o en el **domicilio** de la **víctima**, o se realice **quebrantando** una **pena** de las **contempladas** en el artículo 48 de este **Código** o una medida **cautelar** o de **seguridad** de la misma **naturaleza**.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, el **Juez o Tribunal, razonándolo en sentencia**, en atención a las **circunstancias personales** del **autor** y a las **concurrentes** en la realización del **hecho**, podrá **imponer** la pena **inferior en grado**.»

Quebrantamiento de condena (Art. 40)

Se modifica el artículo 468 del Código Penal que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los que **quebrantaren** su **condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia** serán **castigados** con la pena de **prisión de 6 meses a 1 año** si estuvieran **privados de libertad**, y con la **pena de multa de 12 a 24 meses** en los demás casos.

2. Se **impondrá** en todo caso la **pena de prisión de 6 meses a 1 año** a los que **quebrantaren** una **pena** de las **contempladas** en el artículo 48 de este **Código** o una **medida cautelar** o de **seguridad** de la misma **naturaleza** impuestas en procesos **criminales** en los que el **ofendido** sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2.»

Protección contra las vejaciones leves (Art. 41)

El artículo 620 del Código Penal queda redactado como sigue:

«Serán **castigados** con la **pena de multa de 10 a 20 días**:

- Los que de modo **leve amenacen** a otro con **armas** u otros **instrumentos peligrosos**, o los **saquen** en **riña**, como no sea en **justa defensa**, salvo que el hecho sea **constitutivo de delito**.
- Los que **causen** a otro una **amenaza**, **coacción**, **injuria** o **vejación** injusta de carácter **leve**, salvo que el hecho sea constitutivo de **delito**.

Los hechos **descritos** en los **2 números** anteriores sólo serán **perseguidos** mediante **denuncia** de la persona **agraviada** o de su **representante legal**.

En los supuestos del número 2.º de este artículo, cuando el **ofendido** fuere alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2, la pena será la de **localización permanente** de **4 a 8 días**, siempre en **domicilio diferente** y **alejado** del de la víctima, o **trabajos en beneficio** de la **comunidad** de **5 a 10 días**. En estos casos **no será exigible** la denuncia a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, excepto para la **persecución** de las **injurias**.»

Administración penitenciaria (Art. 42)

La **Administración penitenciaria** realizará programas **específicos** para **internos condenados** por **delitos** relacionados con la **violencia de género**.

Las **Juntas de Tratamiento** valorarán, en las **progresiones** de **grado**, **concesión** de **permisos** y **concesión** de la **libertad condicional**, el **seguimiento** y **aprovechamiento** de dichos **programas específicos** por parte de los **internos** a que se refiere el apartado anterior.

TUTELA JUDICIAL (Tít. 5)

LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (Cap. 1)

Organización territorial (Art. 43)

Se adiciona un artículo 87 bis en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

En cada partido habrá **1 o más Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer**, con **sede** en la **capital** de aquél y **jurisdicción** en todo su **ámbito territorial**. Tomarán su **designación** del **municipio** de su **sede**.

No obstante lo anterior, podrán **establecerse**, excepcionalmente, **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** que **extiendan** su **jurisdicción** a **2 o más partidos** dentro de la **misma provincia**.

El **Consejo General** del **Poder Judicial** podrá acordar, **previo informe** de las **Salas de Gobierno**, que, en aquellas **circunscripciones** donde sea **conveniente** en función de la **carga de trabajo** existente, el conocimiento de los **asuntos referidos** en el artículo 87 ter de la presente **Ley Orgánica**, corresponda a uno de los **Juzgados** de **Primera Instancia e Instrucción**, o de **Instrucción** en su caso, **determinándose** en esta situación que **1 solo** de estos **Órganos** conozca de todos estos asuntos dentro del **partido judicial**, ya sea de forma **exclusiva** o conociendo también de otras materias.

En los **partidos judiciales** en que exista **1 solo Juzgado** de **Primera Instancia e Instrucción** será éste el que **asuma** el conocimiento de los **asuntos** a que se refiere el artículo 87 ter de esta Ley.»

Competencia (Art. 44)

Se adiciona un artículo 87 ter en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

«1. Los **Juzgados** de **Violencia sobre la Mujer** conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los **procedimientos** y **recursos** previstos en la **Ley de Enjuiciamiento Criminal**, de los siguientes supuestos:

De la **instrucción** de los **procesos** para exigir **responsabilidad penal** por los **delitos** recogidos en los títulos del **Código Penal** relativos a **homicidio**, **aborto**, **lesiones**, **lesiones al feto**, delitos contra la **libertad**, delitos

contra la **integridad moral**, contra la **libertad e indemnidad sexuales** o cualquier otro delito cometido con **violencia o intimidación**, siempre que se hubiesen **cometido** contra quien **sea o haya sido** su **esposa, o mujer** que esté o haya estado ligada al autor por análoga **relación de afectividad**, aun **sin convivencia**, así como de los **cometidos** sobre los **descendientes, propios** o de la **esposa o conviviente**, o sobre los **menores o incapaces** que con él convivan o que se hallen **sujetos** a la **potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda** de hecho de la **esposa o conviviente**, cuando también se haya **producido** un acto de **violencia de género**.

De la **instrucción** de los procesos para **exigir responsabilidad penal** por cualquier **delito** contra los **derechos y deberes familiares**, cuando la **víctima** sea alguna de las **personas señaladas** como tales en la **letra anterior**.

De la **adopción** de las **correspondientes órdenes de protección** a las víctimas, **sin perjuicio** de las **competencias atribuidas** al **Juez de Guardia**.

Del **conocimiento y fallo** de las **faltas** contenidas en los **títulos I y II** del libro **III** del **Código Penal**, cuando la **víctima** sea alguna de las **personas señaladas** como tales en la **letra a)** de este apartado.

- Los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** podrán conocer en el **orden civil**, en todo caso de **conformidad** con los **procedimientos y recursos** previstos en la **Ley de Enjuiciamiento Civil**, de los siguientes asuntos:
- Los de **filiación, maternidad y paternidad**.
- Los de **nulidad** del **matrimonio, separación y divorcio**.
- Los que **versen** sobre **relaciones paterno filiales**.
- Los que tengan por **objeto** la **adopción o modificación** de **medidas de trascendencia familiar**.
- Los que **versen** exclusivamente sobre **guarda y custodia** de **hijos e hijas menores** o sobre **alimentos reclamados** por un **progenitor** contra el otro en **nombre** de los **hijos e hijas menores**.
- Los que **versen** sobre la **necesidad** de **asentimiento** en la **adopción**.
- Los que tengan por **objeto** la **oposición** a las **resoluciones administrativas** en **materia de protección de menores**.

Los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** tendrán de forma **exclusiva y excluyente competencia** en el **orden civil** cuando concurren **simultáneamente** los siguientes requisitos:

Que se trate de un **proceso civil** que tenga por **objeto** alguna de las **materias indicadas** en el **número 2** del presente **artículo**.

Que alguna de las **partes** del **proceso civil** sea **víctima** de los **actos de violencia de género**, en los **términos** a que hace referencia el apartado 1 a) del presente **artículo**.

Que alguna de las **partes** del **proceso civil** sea **imputado** como **autor, inductor o cooperador** necesario en la **realización** de **actos de violencia de género**.

Que se hayan iniciado ante el **Juez de Violencia** sobre la **Mujer actuaciones penales** por **delito o falta** a consecuencia de un **acto de violencia** sobre la mujer, o se haya **adoptado** una **orden de protección** a una **víctima de violencia de género**.

Cuando el **Juez** apreciara que los **actos** puestos en su **conocimiento**, de forma **notoria, no constituyen** expresión de **violencia de género**, podrá **inadmitir** la **pretensión**, remitiéndola al **órgano judicial** competente.

En todos estos **casos** está **vedada** la **mediación**.»

Recursos en materia penal (Art. 45)

Se adiciona un nuevo ordinal 4.º al artículo 82.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

«De los **recursos** que establezca la ley contra las **resoluciones** en **materia penal** dictadas por los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** de la **provincia**. A fin de **facilitar** el **conocimiento** de estos **recursos**, y atendiendo al número de **asuntos existentes**, deberán **especializarse 1 o varias** de sus **secciones de conformidad** con lo previsto en el artículo 98 de la citada **Ley Orgánica**. Esta **especialización** se **extenderá** a aquellos **supuestos** en que corresponda a la **Audiencia Provincial** el **enjuiciamiento** en **primera instancia** de asuntos **instruidos** por los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** de la **provincia**.»

Recursos en materia civil (Art. 46)

Se adiciona un nuevo párrafo al artículo 82.4 en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, con la siguiente redacción:

«Las **Audiencias Provinciales** conocerán, asimismo, de los **recursos** que establezca la ley **contra** las **resoluciones** dictadas en **materia civil** por los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** de la **provincia**. A fin de facilitar el **conocimiento** de estos **recursos**, y atendiendo al número de **asuntos existentes**, podrán **especializarse una o varias** de sus **secciones de conformidad** con lo **previsto** en el artículo 98 de la citada Ley Orgánica.»

Formación (Art. 47)

El **Gobierno**, el **Consejo General del Poder Judicial** y las **comunidades autónomas**, en el ámbito de sus **respectivas competencias**, asegurarán una **formación específica** relativa a la **igualdad** y **no discriminación** por razón de **sexo** y sobre violencia de género en los **cursos de formación de Jueces y Magistrados, Fiscales, Secretarios Judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Médicos Forenses**. En todo caso, en los **cursos de formación** anteriores se **introducirá** el **enfoque** de la **discapacidad** de las víctimas y se tendrá en cuenta la **violencia vicaria**.

Jurisdicción de los Juzgados (Art. 48)

Se modifica el apartado 1 del artículo 4 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

Los **Juzgados de Primera Instancia e Instrucción** y los **Juzgados de Violencia** sobre la **Mujer** tienen **jurisdicción** en el ámbito **territorial** de su **respectivo partido**.

No obstante lo anterior, y atendidas las circunstancias **geográficas**, de **ubicación** y **población**, podrán **crearse Juzgados de Violencia sobre la Mujer** que **atiendan** a más de un **partido judicial**.

Sede de los Juzgados (Art. 49)

Se modifica el artículo 9 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

Los **Juzgados de Primera Instancia e Instrucción** y los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** tienen su **sede** en la **capital** del **partido**.

Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Art. 50)

Se adiciona un artículo 15 bis en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente redacción:

La **planta inicial** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** será la establecida en el **anexo XIII** de esta Ley.

La **concreción** de la **planta inicial** y la que sea **objeto** de **desarrollo posterior**, será **realizada** mediante **Real Decreto de conformidad** con lo establecido en el artículo 20 de la presente **Ley** y se ajustará a los siguientes criterios:

Podrán crearse **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** en aquellos **partidos judiciales** en los que la **carga de trabajo** así lo **aconseje**.

En aquellos **partidos judiciales** en los que, en **atención** al **volumen** de asuntos, **no** se considere **necesario** el **desarrollo** de la **planta judicial**, se podrán **transformar** algunos de los **Juzgados de Instrucción** y de **Primera Instancia e Instrucción** en funcionamiento en **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

Asimismo cuando se considere, en **función** de la **carga de trabajo**, que no es **precisa** la **creación** de un **órgano judicial** específico, se **determinará**, de existir varios, qué **Juzgados de Instrucción** o de **Primera Instancia e Instrucción**, **asumirán** el **conocimiento** de las **materias** de violencia sobre la mujer en los términos del artículo 1 de la **Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral** contra la **Violencia de Género** con carácter **exclusivo** junto con el resto de las **correspondientes** a la jurisdicción **penal** o **civil**, según la **naturaleza** del **órgano** en cuestión.

Serán servidos por **Magistrados** los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** que tengan su **sede** en la **capital** de la **provincia** y los demás **Juzgados** que así se **establecen** en el **anexo XIII** de esta Ley.

Plazas servidas por Magistrados (Art. 51)

El apartado 2 del artículo 21 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial tendrá la siguiente redacción:

El **Ministro de Justicia** podrá **establecer** que los **Juzgados de Primera Instancia** y de **Instrucción** y los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, sean servidos por **Magistrados**, siempre que estén **radicados** en un **partido judicial** superior a **150.000 habitantes** de derecho o experimenten **aumentos de población** de hecho que **superen** dicha **cifra**, y el **volumen** de **cargas competenciales** así lo exija.

Constitución de los Juzgados (Art. 52)

Se incluye un nuevo artículo 46 ter en la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, con la siguiente redacción:

El **Gobierno**, dentro del marco de la **Ley de Presupuestos Generales del Estado**, **oído** el **Consejo General del Poder Judicial** y, en su caso, la **Comunidad Autónoma** afectada, procederá de forma **escalonada** y mediante **Real Decreto** a la **constitución, compatibilización y transformación** de **Juzgados de Instrucción** y de **Primera Instancia e Instrucción** para la **plena efectividad** de la **planta** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

En tanto las **Comunidades Autónomas no fijen** la **sede** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, ésta se entenderá **situada** en aquellas **poblaciones** que se **establezcan** en el **anexo XIII** de la presente Ley.

Notificación de las sentencias dictadas por Tribunales (Art. 53)

Se adiciona un nuevo párrafo en el art. 160 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:

Cuando la **instrucción** de la **causa** hubiera **correspondido** a un **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** la **sentencia** será **remitida** al mismo por **testimonio** de forma **inmediata**, con **indicación** de si la misma **es o no firme**.

Especialidades en el supuesto de juicios rápidos (Art. 54)

Se adiciona un nuevo art. 797 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:

En el **supuesto** de que la **competencia** corresponda al **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**, las **diligencias** y **resoluciones** señaladas en los artículos anteriores deberán ser **practicadas** y **adoptadas** durante las **horas** de **audiencia**.

La **Policía Judicial** habrá de **realizar** las **citaciones** a que se refiere el artículo 796, ante el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**, en el día **hábil** más **próximo**, entre aquéllos que se **fijen reglamentariamente**.

No obstante el **detenido**, si lo hubiere, habrá de ser **puesto a disposición** del **Juzgado de Instrucción de Guardia**, a los solos **efectos** de **regularizar** su **situación personal**, cuando no sea posible la **presentación** ante el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** que resulte **competente**.

Para la **realización** de las **citaciones** antes referidas, la **Policía Judicial** fijará el **día** y la **hora** de la **comparecencia** coordinadamente con el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**. A estos efectos el **Consejo General del Poder Judicial**, de acuerdo con lo **establecido** en el artículo 110 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, dictará los **Reglamentos oportunos** para asegurar esta **coordinación**.

Notificación de las sentencias dictadas por Juzgado de lo Penal (Art. 55)

Se adiciona un apartado 5 en el artículo 789 de la **Ley de Enjuiciamiento Criminal**, con el contenido siguiente:

Cuando la **instrucción** de la **causa** hubiera correspondido a un **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** la **sentencia** será **remitida** al mismo por **testimonio** de forma **inmediata**. Igualmente se le **remitirá** la **declaración** de **firmeza** y la sentencia de **segunda instancia** cuando la misma fuera **revocatoria**, en **todo** o en parte, de la sentencia **previamente dictada**.

Especialidades en el supuesto de juicios rápidos en materia de faltas (Art. 56)

Se adiciona un nuevo apartado 5 al artículo 962 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el contenido siguiente:

En el supuesto de que la **competencia** para conocer **corresponda** al **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**, la **Policía Judicial** habrá de realizar las **citaciones** a que se refiere este artículo ante dicho **Juzgado** en el **día hábil** más **próximo**. Para la **realización** de las **citaciones** antes referidas, la **Policía Judicial** fijará el **día** y la **hora** de la **comparecencia** coordinadamente con el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**. A estos efectos el **Consejo General del Poder Judicial**, de acuerdo con lo establecido en el artículo 110 de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, dictará los Reglamentos oportunos para asegurar esta **coordinación**.

NORMAS PROCESALES CIVILES (Cap. 2)

Pérdida de la competencia objetiva cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer (Art. 57)

Se adiciona un nuevo artículo 49 bis en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuya redacción es la siguiente:

«Artículo 49 bis. Pérdida de la competencia cuando se produzcan actos de violencia sobre la mujer.

Cuando un **Juez**, que esté **conociendo** en **primera instancia** de un **procedimiento civil**, tuviese noticia de la **comisión** de un **acto de violencia** de los definidos en el artículo 1 de la **Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral** contra la **Violencia de Género**, que haya dado lugar a la **iniciación** de un **proceso penal** o a una **orden de protección**, tras **verificar** la **conurrencia** de los **requisitos** previstos en el apartado 3 del artículo 87 ter de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, deberá **inhibirse**, **remitiendo** los autos en el **estado** en que se **hallen** al Juez de Violencia sobre la Mujer que resulte **competente**, **salvo** que se haya **iniciado** la **fase del juicio oral**.

Cuando un **Juez** que esté **conociendo** de un **procedimiento civil**, tuviese noticia de la posible **comisión** de un **acto de violencia** de **género**, que **no** haya dado lugar a la **iniciación** de un **proceso penal**, ni a **dictar** una **orden de protección**, tras verificar que **concurren** los **requisitos** del apartado 3 del artículo 87 ter de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, deberá inmediatamente **citar** a las partes a una **comparecencia** con el **Ministerio Fiscal** que se **celebrará** en las siguientes **24 horas** a fin de que éste tome **conocimiento** de cuantos **datos** sean **relevantes** sobre los **hechos acaecidos**. Tras ella, el **Fiscal**, de **manera inmediata**, habrá de decidir si **procede**, en las **24 horas** siguientes, a **denunciar** los **actos de violencia de género** o a **solicitar** **orden de protección** ante el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer** que resulte **competente**. En el supuesto de que se **interponga denuncia** o se **solicite** la **orden de protección**, el Fiscal habrá de entregar **copia** de la **denuncia** o **solicitud** en el **Tribunal**, el cual continuará conociendo del **asunto** hasta que sea, en su caso, requerido de **inhibición** por el **Juez de Violencia sobre la Mujer** competente.

Cuando un **Juez de Violencia sobre la Mujer** que esté conociendo de una **causa penal** por violencia de género tenga **conocimiento** de la **existencia** de un **proceso civil**, y **verifique** la **conurrencia** de los **requisitos** del apartado 3 del artículo 87 ter de la **Ley Orgánica del Poder Judicial**, requerirá de **inhibición** al **Tribunal Civil**, el cual **deberá** acordar de **inmediato** su **inhibición** y la **remisión** de los **autos** al órgano **requirente**.

A los efectos del párrafo anterior, el **requerimiento** de **inhibición** se acompañará de testimonio de la **incoación** de **diligencias previas** o de **juicio de faltas**, del **auto** de **admisión** de la **querrela**, o de la **orden** de **protección adoptada**.

En los casos **previstos** en los apartados 1 y 2 de este **artículo**, el **Tribunal Civil** **remitirá** los **autos** al **Juzgado** de **Violencia sobre la Mujer** **sin** que sea de **aplicación** lo **previsto** en el artículo 48.3 de la **Ley** de **Enjuiciamiento Civil**, debiendo las partes desde ese momento **comparecer** ante dicho **órgano**.

En estos **supuestos** **no** serán de **aplicación** las **restantes normas** de esta **sección**, ni se **admitirá** **declinatoria**, debiendo las partes que quieran **hacer valer** la **competencia** del **Juzgado** de **Violencia sobre la Mujer** presentar **testimonio** de alguna de las **resoluciones** dictadas por dicho **Juzgado** a las que se refiere el **párrafo final** del número anterior.

Los **Juzgados** de **Violencia sobre la Mujer** ejercerán sus **competencias** en **materia civil** de forma **exclusiva** y **excluyente**, y en todo caso de **conformidad** con los **procedimientos** y **recursos** previstos en la **Ley** de **Enjuiciamiento Civil**.»

NORMAS PROCESALES PENALES (Cap. 3)

Competencias en el orden penal (Art. 58)

Se modifica el artículo 14 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado de la siguiente forma:

«**Fuera** de los **casos** que **expresa** y **limitadamente** atribuyen la **Constitución** y las **leyes** a **Jueces** y **Tribunales** determinados, serán competentes:

Para el **conocimiento** y **fallo** de los **juicios** de **faltas**, el **Juez** de **Instrucción**, **salvo** que la **competencia** **corresponda** al **Juez** de **Violencia sobre la Mujer** de conformidad con el **número quinto** de este artículo. Sin embargo, **conocerá** de los **juicios** por **faltas tipificadas** en los artículos 626, 630, 632 y 633 del **Código Penal**, el **Juez** de **Paz** del lugar en que se hubieran **cometido**. También **conocerán** los **Jueces de Paz** de los **juicios** por **faltas tipificadas** en el artículo 620.1.º y 2.º, del **Código Penal**, **excepto** cuando el **ofendido** fuere alguna de las personas a que se refiere el artículo 173.2 del mismo **Código**.

Para la **instrucción** de las **causas**, el **Juez** de **Instrucción** del **partido** en que el **delito** se hubiere **cometido**, o el **Juez** de **Violencia sobre la Mujer**, o el **Juez Central** de **Instrucción** respecto de los **delitos** que la **Ley** **determine**.

Para el **conocimiento** y **fallo** de las **causas** por **delitos** a los que la **Ley** señale **pena privativa** de **libertad** de duración **no superior** a **5 años** o **pena** de **multa** cualquiera que sea su **cuantía**, o cualesquiera otras de **distinta naturaleza**, bien sean **únicas**, **conjuntas** o **alternativas**, siempre que la **duración** de éstas no exceda de **10 años**, así como por **faltas**, **sean** o **no incidentales**, **imputables** a los **autores** de estos **delitos** o a otras personas, cuando la **comisión** de la **falta** o su **prueba** estuviesen **relacionadas** con aquéllos, el **Juez** de lo **Penal** de la **circunscripción** donde el **delito** fue cometido, o el **Juez** de lo **Penal** correspondiente a la circunscripción del **Juzgado** de **Violencia sobre la Mujer** en su caso, o el **Juez Central** de lo **Penal** en el ámbito que le es **propio**, **sin perjuicio** de la **competencia** del **Juez** de **Instrucción** de **Guardia** del lugar de **comisión** del delito para **dictar** **sentencia** de **conformidad**, o del **Juez** de **Violencia sobre la Mujer** competente en su caso, en los términos establecidos en el artículo 801.

No obstante, en los **supuestos** de **competencia** del **Juez** de lo **Penal**, **si** el **delito fuere** de los atribuidos al **Tribunal del Jurado**, el **conocimiento** y **fallo** corresponderá a éste.

Para el **conocimiento** y **fallo** de las **causas** en los demás casos la **Audiencia Provincial** de la circunscripción donde el **delito** se haya **cometido**, o la **Audiencia Provincial** correspondiente a la **circunscripción** del **Juzgado** de **Violencia sobre la Mujer** en su caso, o la **Sala** de lo **Penal** de la **Audiencia Nacional**.

No obstante, en los **supuestos** de **competencia** de la **Audiencia Provincial**, **si** el **delito fuere** de los atribuidos al **Tribunal** de **Jurado**, el **conocimiento** y **fallo** corresponderá a éste.

Los **Juzgados** de **Violencia sobre la Mujer** serán competentes en las siguientes materias, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en esta Ley:

De la **instrucción** de los **procesos** para exigir **responsabilidad** penal por los **delitos** recogidos en los títulos del **Código Penal** relativos a **homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto**, delitos contra la **libertad**, delitos contra la **integridad moral**, contra la **libertad** e **indemnidad sexuales** o cualquier otro delito cometido con **violencia** o **intimidación**, **siempre** que se hubiesen **cometido contra** quien sea o haya sido su **esposa**, o **mujer** que esté o haya estado **ligada** al **autor** por análoga **relación** de **afectividad**, aun **sin convivencia**, así como de los cometidos sobre los **descendientes, propios** o de la **esposa** o **conviviente**, o sobre los **menores** o **incapaces** que con él convivan o que se hallen sujetos a la **potestad, tutela, curatela, acogimiento** o **guarda** de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.

De la **instrucción** de los **procesos** para exigir **responsabilidad penal** por cualquier **delito** contra los **derechos** y **deberes familiares**, cuando la **víctima** sea alguna de las personas **señaladas** como tales en la letra anterior.

De la **adopción** de las **correspondientes órdenes** de **protección** a las víctimas, **sin perjuicio** de las **competencias** atribuidas al **Juez de Guardia**.

Del **conocimiento** y **fallo** de las **faltas contenidas** en los **títulos I y II** del libro **III** del **Código Penal**, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la **letra a)** de este apartado.»

Competencia territorial (Art. 59)

Se adiciona un nuevo artículo 15 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:

«En el caso de que se trate de algunos de los **delitos** o **faltas** cuya **instrucción** o **conocimiento** corresponda al **Juez de Violencia sobre la Mujer**, la **competencia territorial** vendrá **determinada** por el **lugar** del **domicilio** de la **víctima**, **sin perjuicio** de la adopción de la **orden de protección**, o de **medidas urgentes** del artículo 13 de la presente **Ley** que pudiera **adoptar** el **Juez** del lugar de **comisión** de los hechos.»

Competencia por conexión (Art. 60)

Se adiciona un nuevo artículo 17 bis en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya redacción es la siguiente:

«La **competencia** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer** se **extenderá** a la **instrucción** y **conocimiento** de los **delitos** y **faltas** conexas **siempre** que la **conexión** tenga su **origen** en alguno de los **supuestos previstos** en los números 3.º y 4.º del artículo 17 de la presente **Ley**.»

MEDIDAS JUDICIALES DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD DE LAS VÍCTIMAS (Cap. 4)

Disposiciones generales (Art. 61)

Las **medidas** de **protección** y **seguridad** previstas en el presente capítulo serán **compatibles** con cualesquiera de las **medidas cautelares** y de **aseguramiento** que se pueden **adoptar** en los **procesos civiles** y **penales**.

En **todos** los **procedimientos** relacionados con la **violencia de género**, el **Juez competente** deberá **pronunciarse** en **todo caso**, de **oficio** o a **instancia** de las **víctimas**, de los **hijos**, de las personas que **convivan** con **ellas** o se **hallen sujetas** a su **guarda** o **custodia**, del **Ministerio Fiscal** o de la **Administración** de la que dependan los **servicios de atención** a las **víctimas** o su **acogida**, sobre la **pertinencia** de la **adopción** de las **medidas cautelares** y de **aseguramiento** contempladas en este capítulo, **especialmente** sobre las **recogidas** en los artículos 64, 65 y 66, determinando su **plazo** y su **régimen** de **cumplimiento** y, si **procediera**, las **medidas complementarias** a ellas que fueran precisas.

De la orden de protección (Art. 62)

Recibida la **solicitud** de **adopción** de una **orden de protección**, el **Juez de Violencia sobre la Mujer** y, en su caso, el **Juez de Guardia**, **actuarán** de **conformidad** con lo **dispuesto** en el artículo 544 ter de la **Ley** de **Enjuiciamiento Criminal**.

De la protección de datos y las limitaciones a la publicidad (Art. 63)

En las **actuaciones** y **procedimientos** relacionados con la violencia de género se **protegerá** la **intimidad** de las **víctimas**; en **especial**, sus **datos personales**, los de sus **descendientes** y los de cualquier **otra persona** que esté **bajo** su **guarda** o **custodia**.

Los **Jueces competentes** podrán **acordar**, de **oficio** o a **instancia de parte**, que las **vistas** se **desarrollen a puerta cerrada** y que las **actuaciones** sean **reservadas**.

De las medidas de salida del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones (Art. 64)

El **Juez** podrá **ordenar** la **salida obligatoria** del **inculpado** por violencia de género del **domicilio** en el que hubiera estado **conviviendo** o tenga su **residencia** la **unidad familiar**, así como la **prohibición** de **volver** al **mismo**.

El **Juez**, con carácter **excepcional**, podrá **autorizar** que la persona **protegida concierte**, con una **agencia** o **sociedad pública** allí donde la hubiere y que **incluya** entre sus **actividades** la del **arrendamiento** de **viviendas**, la **permuta** del **uso** atribuido de la **vivienda familiar** de la que sean **copropietarios**, por el uso de **otra vivienda**, durante el **tiempo** y en las **condiciones** que se determinen.

El **Juez** podrá **prohibir** al **inculpado** que se **aproxime** a la **persona protegida**, lo que le **impide acercarse** a la misma en **cualquier lugar** donde se encuentre, así como **acercarse** a su **domicilio**, a su **lugar de trabajo** o a cualquier otro que sea **frecuentado** por ella.

Podrá acordarse la **utilización** de **instrumentos** con la **tecnología adecuada** para **verificar** de **inmediato** su **incumplimiento**.

El **Juez** **fixará** una **distancia mínima** entre el **inculpado** y la **persona protegida** que **no** se podrá **rebasar**, **bajo apercibimiento** de incurrir en **responsabilidad penal**.

La **medida** de **alejamiento** podrá **acordarse** con **independencia** de que la **persona afectada**, o aquéllas a quienes se pretenda **proteger**, hubieran **abandonado** previamente el **lugar**.

El **Juez** podrá **prohibir** al **inculpado** toda clase de **comunicación** con la **persona** o **personas** que se indique, **bajo apercibimiento** de incurrir en **responsabilidad penal**.

Las **medidas** a que se refieren los **apartados anteriores** podrán acordarse **acumulada** o **separadamente**.

De las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores (Art. 65)

El **Juez** podrá **suspender** para el **inculpado** por violencia de género el **ejercicio** de la **patria potestad**, **guarda** y **custodia**, **acogimiento**, **tutela**, **curatela** o **guarda de hecho**, respecto de los **menores** que dependan de él.

Si **no** acordara la **suspensión**, el **Juez** deberá **pronunciarse** en todo **caso** sobre la forma en la que se **ejercerá** la **patria potestad** y, en su caso, la **guarda** y **custodia**, el **acogimiento**, la **tutela**, la **curatela** o la **guarda de hecho** de los **menores**. Asimismo, **adoptará** las medidas necesarias para **garantizar** la **seguridad**, **integridad** y **recuperación** de los **menores** y de la **mujer**, y realizará un seguimiento **periódico** de su **evolución**.

De la medida de suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores (Art. 66)

El **Juez** ordenará la **suspensión** del régimen de **visitas**, **estancia**, **relación** o **comunicación** del **inculpado** por violencia de género respecto de los **menores** que dependan de él. Si, en **interés superior** del **menor**, **no** acordara la **suspensión**, el **Juez** deberá **pronunciarse** en todo caso sobre la forma en que se ejercerá el **régimen de estancia**, **relación** o **comunicación** del inculpado por violencia de género respecto de los **menores** que dependan del mismo. Asimismo, **adoptará** las **medidas** necesarias para **garantizar** la **seguridad**, **integridad** y **recuperación** de los **menores** y de la **mujer**, a través de servicios de **atención especializada**, y realizará un **seguimiento periódico** de su **evolución**, en coordinación con dichos servicios.

De la medida de suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas (Art. 67)

El **Juez** podrá **acordar**, respecto de los inculpados en **delitos** relacionados con la violencia a que se refiere esta Ley, la **suspensión** del **derecho** a la **tenencia**, **porte** y **uso** de **armas**, con la obligación de **depositarlas** en los términos establecidos por la **normativa vigente**.

Garantías para la adopción de las medidas (Art. 68)

Las **medidas restrictivas** de **derechos** contenidas en este capítulo deberán **adoptarse** mediante **auto motivado** en el que se **aprecie** su **proporcionalidad** y **necesidad**, y, en todo caso, con **intervención** del **Ministerio Fiscal** y **respeto** de los **principios** de **contradicción**, **audiencia** y **defensa**.

Mantenimiento de las medidas de protección y seguridad (Art. 69)

Las medidas de este capítulo podrán **mantenerse** tras la **sentencia definitiva** y durante la **tramitación** de los **eventuales recursos** que **correspondiesen**. En este caso, deberá hacerse constar en la **sentencia** el **mantenimiento** de tales medidas.

FISCAL CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER (Cap. 5)

Funciones del Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (Art. 70)

Se añade un artículo 18 quáter en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la siguiente redacción:

«1. El **Fiscal General** del **Estado** nombrará, **oído** el **Consejo Fiscal**, como delegado, un **Fiscal** contra la **Violencia sobre la Mujer**, con categoría de **Fiscal de Sala**, que ejercerá las siguientes funciones:

Practicar las **diligencias** a que se refiere el artículo 5 del **Estatuto Orgánico** del **Ministerio Fiscal**, e **intervenir** directamente en aquellos **procesos penales** de **especial trascendencia** apreciada por el **Fiscal General** del **Estado**, referentes a los delitos por **actos** de violencia de género comprendidos en el artículo 87 ter.1 de la **Ley Orgánica** del **Poder Judicial**.

Intervenir, por **delegación** del **Fiscal General** del **Estado**, en los **procesos civiles** comprendidos en el artículo 87 ter.2 de la **Ley Orgánica** del **Poder Judicial**.

Supervisar y coordinar la **actuación** de las **Secciones** contra la Violencia sobre la Mujer, y **recabar informes** de las mismas, dando **conocimiento** al **Fiscal Jefe** de las **Fiscalías** en que se **integren**.

Coordinar los criterios de **actuación** de las **diversas Fiscalías** en materias de violencia de género, para lo cual podrá proponer al **Fiscal General** del **Estado** la **emisión** de las correspondientes **instrucciones**.

Elaborar **semestralmente**, y presentar al **Fiscal General** del **Estado**, para su **remisión** a la **Junta de Fiscales de Sala** del **Tribunal Supremo**, y al **Consejo Fiscal**, un informe sobre los **procedimientos seguidos** y **actuaciones** practicadas por el **Ministerio Fiscal** en materia de violencia de género.

Para su adecuada **actuación** se le **adscribirán** los **profesionales** y **expertos** que sean necesarios para **auxiliarlo** de manera **permanente** u **ocasional**.»

Secciones contra la violencia sobre la mujer (Art. 71)

Se sustituyen los párrafos segundo y tercero del apartado 1 del artículo 18 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por el siguiente texto:

«En la **Fiscalía** de la **Audiencia Nacional** y en cada **Fiscalía** de los **Tribunales Superiores de Justicia** y de las **Audiencias Provinciales**, existirá una **Sección** de **Menores** a la que se encomendarán las **funciones** y **facultades** que al **Ministerio Fiscal** atribuye la **Ley Orgánica Reguladora** de la **Responsabilidad Penal** de los **Menores** y otra **Sección** Contra la **Violencia sobre la Mujer** en cada **Fiscalía** de los **Tribunales Superiores de Justicia** y de las **Audiencias Provinciales**. A estas **Secciones** serán adscritos **Fiscales** que pertenezcan a sus **respectivas plantillas**, teniendo **preferencia** aquellos que por razón de las **anteriores funciones** desempeñadas, **cursos** impartidos o **superados** o por cualquier otra circunstancia análoga, se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las **necesidades del servicio** así lo aconsejen podrán actuar también en otros **ámbitos** o materias.

En las **Fiscalías** de los **Tribunales Superiores de Justicia** y en las **Audiencias Provinciales** podrán existir las **adscripciones permanentes** que se determinen reglamentariamente.

A la **Sección** Contra la **Violencia** sobre la **Mujer** se atribuyen las siguientes funciones:

Intervenir en los **procedimientos penales** por los **hechos constitutivos** de **delitos** o **faltas** cuya **competencia** esté atribuida a los **Juzgados** de **Violencia** sobre la **Mujer**.

Intervenir **directamente** en los **procesos civiles** cuya **competencia** esté atribuida a los **Juzgados** de **Violencia** sobre la **Mujer**.

En la **Sección** Contra la **Violencia** sobre la **Mujer** deberá llevarse un **registro** de los **procedimientos** que se sigan **relacionados** con estos **hechos** que permitirá la **consulta** de los **Fiscales** cuando conozcan de un **procedimiento** de los que tienen **atribuida** la **competencia**, al **efecto** en cada caso **procedente**.»

Delegados de la Jefatura de la Fiscalía (Art. 72)

Se da una **nueva redacción** al apartado 5 del artículo 22 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del **Estatuto Orgánico** del **Ministerio Fiscal**, que queda redactado de la siguiente forma:

«5. En aquellas **Fiscalías** en las que el **número** de **asuntos** de que conociera así lo **aconsejara** y siempre que resultara conveniente para la **organización** del **servicio**, **previo informe** del **Consejo Fiscal**, podrán designarse **delegados** de la **Jefatura** con el fin de asumir las **funciones** de **dirección** y **coordinación** que le fueran específicamente encomendadas. La **plantilla orgánica** determinará el **número máximo** de **delegados** de la **Jefatura** que se puedan **designar** en cada **Fiscalía**. En todo caso, en cada **Fiscalía** habrá un **delegado** de **Jefatura** que asumirá las funciones de **dirección** y **coordinación**, en los términos previstos en este apartado, en materia de **infracciones** relacionadas con la **violencia de género**, delitos contra el **medio ambiente**, y **vigilancia penitenciaria**, con carácter **exclusivo** o **compartido** con otras materias.

Tales delegados serán **nombrados** y, en su caso, **relevados** mediante **resolución dictada** por el **Fiscal General** del Estado, a propuesta motivada del **Fiscal Jefe** respectivo, **oída** la **Junta de Fiscalía**. Cuando la resolución del **Fiscal General** del **Estado** sea **discrepante** con la propuesta del **Fiscal Jefe** respectivo, deberá ser **motivada**.

Para la **cobertura** de estas **plazas** será preciso, con **carácter previo** a la propuesta del **Fiscal Jefe** correspondiente, realizar una **convocatoria** entre los **Fiscales** de la **plantilla**. A la propuesta se acompañará **relación** del resto de los **Fiscales** que hayan solicitado el **puesto** con **aportación** de los **méritos alegados**.»

Pensiones y ayudas (Disposición adicional 1ª)

Quien fuera **condenado**, por **sentencia firme**, por la **comisión** de un **delito doloso** de **homicidio** en cualquiera de sus formas o de **lesiones**, **perderá** la condición de **beneficiario** de la **pensión** de **viudedad** que le corresponda dentro del **sistema público** de **pensiones** cuando la víctima de dichos **delitos** fuera la **causante** de la **pensión**, salvo que, en su caso, medie **reconciliación** entre ellos.

En tales casos, la **pensión** de **viudedad** que hubiera debido reconocerse **incrementará** las **pensiones** de **orfandad**, si las hubiese, siempre que tal **incremento** esté **establecido** en la **legislación reguladora** del régimen de **Seguridad Social** de que se trate.

A quien fuera **condenado**, por **sentencia firme**, por la comisión de un **delito doloso** de **homicidio** en cualquiera de sus formas o de **lesiones** cuando la **ofendida** por el **delito** fuera su **cónyuge** o **excónyuge**, o estuviera o hubiera estado **ligada** a él por una análoga **relación** de **afectividad**, aun **sin convivencia**, **no** le será **abonable**, en ningún caso, la **pensión** por **orfandad** de la que pudieran ser **beneficiarios** sus **hijos** dentro del **Sistema Público** de **Pensiones**, salvo que, en su caso, hubiera mediado **reconciliación** entre aquellos.

No tendrá la **consideración** de **beneficiario**, a título de **víctima indirecta**, de las **ayudas** previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de **Ayudas y Asistencia** a las **Víctimas de Delitos Violentos** y **contra la Libertad Sexual**, quien fuera condenado por **delito doloso** de **homicidio** en cualquiera de sus formas, cuando la **ofendida** fuera su **cónyuge** o **excónyuge** o persona con la que estuviera o hubiera estado **ligado** de forma estable por análoga **relación** de **afectividad**, con **independencia** de su **orientación sexual**, durante, al menos, los **2 años** anteriores al momento del **fallecimiento**, salvo que hubieran tenido **descendencia** en común, en cuyo caso bastará la mera **convivencia**.

Protocolos de actuación (Disposición adicional 2ª)

El **Gobierno** y las **comunidades autónomas** que hayan asumido **competencias** en materia de **justicia**, organizarán en el **ámbito** que a cada una le es propio los **servicios forenses** de modo que cuenten con **unidades de valoración forense integral** encargadas de **diseñar protocolos** de actuación **global e integral** en casos de violencia de género. Estos protocolos deberán prestar **especial atención** a la **violencia vicaria**.

Modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la Educación (Disposición adicional 3ª)

Uno. Las letras b) y g) del artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del **Derecho a la Educación**, quedarán redactadas de la forma siguiente:

«b) La **formación** en el respeto de los **derechos y libertades fundamentales**, de la **igualdad** entre **hombres y mujeres** y en el ejercicio de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos** de **convivencia**.

g) La formación para la **paz**, la **cooperación** y la **solidaridad** entre los **pueblos** y para la **prevención** de **conflictos** y para la **resolución pacífica** de los mismos y **no violencia** en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar y social**.»

Dos. Se incorporan tres nuevas letras en el apartado 1 del artículo 31 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, que quedarán redactadas de la forma siguiente:

«k) Las **organizaciones** de **mujeres** con **implantación** en todo el **territorio** del **Estado**. **El instituto de la mujer**.

Personalidades de reconocido **prestigio** en la lucha para la **erradicación** de la **violencia de género**.»

Tres. La letra e) del apartado 1 del artículo 32 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedará redactada de la forma siguiente:

«e) Las **disposiciones** que se refieran al **desarrollo** de la **igualdad** de **derechos y oportunidades** y al fomento de la **igualdad real y efectiva** entre **hombres y mujeres** en la enseñanza.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 33 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, quedará redactado de la forma siguiente:

«1. El **Consejo Escolar** del **Estado** elaborará y hará **público anualmente** un **informe** sobre el **sistema educativo**, donde deberán **recogerse y valorarse** los diversos **aspectos** del mismo, incluyendo la posible **situación** de **violencia** ejercida en la **comunidad educativa**. Asimismo se **informará** de las medidas que en relación con la **prevención** de **violencia** y fomento de la **igualdad** entre **hombres y mujeres** establezcan las **Administraciones educativas**.»

Cinco. Se incluye un nuevo séptimo guion en el apartado 1 del artículo 56 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:

«—Una **persona**, elegida por los miembros del **Consejo Escolar** del **Centro**, que impulse medidas **educativas** que fomenten la **igualdad real y efectiva** entre **hombres y mujeres**.»

Seis. Se adiciona una nueva letra m) en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, con la siguiente redacción:

«m) Proponer **medidas e iniciativas** que **favorezcan** la **convivencia** en el **centro**, la **igualdad** entre **hombres y mujeres** y la **resolución pacífica** de **conflictos** en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar y social**.»

Modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (Disposición adicional 4ª)

Uno. Se modifica la letra b) del apartado 1 del artículo 1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactado de la siguiente forma:

«b) La **formación** en el **respeto** de los **derechos y libertades** fundamentales, de la **igualdad** entre **hombres y mujeres** y en el ejercicio de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos** de **convivencia**.»

Dos. Se modifica la letra e) y se añade la letra l) en el apartado 3 del artículo 2 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedarán redactadas de la siguiente forma:

«e) El fomento de los **hábitos** de **comportamiento democrático** y las **habilidades** y **técnica** en la **prevención** de **conflictos** y en la **resolución pacífica** de los mismos.

l) La **formación** para la **prevención** de **conflictos** y para la **resolución pacífica** de los mismos en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar y social.**»

Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 34 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que quedará redactada de la siguiente forma:

«3. La **metodología didáctica** de la formación **profesional** específica promoverá la **integración** de contenidos **científicos, tecnológicos y organizativos**. Asimismo, favorecerá en el alumno la **capacidad** para **aprender** por sí mismo y para **trabajar en equipo**, así como la formación en la **prevención de conflictos** y para la **resolución pacífica** de los mismos en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar y social.**»

Modificación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (Disposición adicional 5ª)

Uno. Se adiciona una nueva letra b), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, y tres nuevas letras n), ñ) y o) en el artículo 1 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) La **eliminación** de los **obstáculos** que dificultan la plena **igualdad** entre **hombres y mujeres**.

La formación en el respeto de los **derechos** y **libertades** fundamentales, de la **igualdad** entre hombres y mujeres y en el ejercicio de la **tolerancia** y de la **libertad** dentro de los **principios democráticos** de convivencia.

ñ) La formación para la **prevención** de **conflictos** y para la **resolución pacífica** de los mismos y **no violencia** en todos los ámbitos de la vida **personal familiar y social.**

El **desarrollo** de las capacidades **afectivas.**»

Dos. Se adicionan dos nuevas letras e) y f), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«e) Ejercitarse en la **prevención** de los **conflictos** y en la **resolución pacífica** de los mismos.

Desarrollar sus capacidades **afectivas.**»

Tres. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) Adquirir habilidades en la **prevención** de **conflictos** y en la **resolución pacífica** de los mismos que permitan **desenvolverse** con **autonomía** en el ámbito **familiar y doméstico**, así como en los grupos **sociales** en los que se relacionan.

Comprender y respetar la **igualdad** entre **sexos**.

Desarrollar sus capacidades **afectivas.**»

Cuatro. Se adicionan tres nuevas letras b), c) y d), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) **Conocer, valorar y respetar** la **igualdad** de **oportunidades** de **hombres y mujeres**.

Relacionarse con los demás **sin violencia**, resolviendo **pacíficamente** los **conflictos**.

Desarrollar sus capacidades **afectivas.**»

Cinco. Se modifica la letra f) del apartado 1 y se añade un nuevo apartado 5 en el artículo 23 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactado de la forma siguiente:

«1. f) **Ética** e **igualdad** entre **hombres y mujeres.**»

«5. La **asignatura** de **Ética** incluirá **contenidos específicos** sobre la **igualdad** entre **hombres y mujeres**.»

Seis. Se adicionan dos nuevas letras b) y c), con el consiguiente desplazamiento de las actuales, en el apartado 2 del artículo 34 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«b) Consolidar una **madurez personal, social y moral**, que les permita actuar de forma **responsable, autónoma y prever** y resolver **pacíficamente** los **conflictos personales, familiares y sociales**.

c) Fomentar la **igualdad real y efectiva** entre hombres y mujeres y **analizar y valorar críticamente** las **desigualdades** entre ellos.»

Siete. Se adiciona un nuevo apartado 3 en el artículo 40 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«3. Con el fin de promover la **efectiva igualdad** entre hombres y mujeres, las **Administraciones educativas** velarán para que todos los **currículos** y los **materiales educativos** reconozcan el igual **valor** de **hombres y mujeres** y se elaboren a partir de **presupuestos no discriminatorios** para las mujeres. Asimismo, deberán fomentar el **respeto** en la **igualdad** de **derechos y obligaciones**.»

Ocho. Se adicionan dos nuevas letras e) y f) en el apartado 2 del artículo 52 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el siguiente contenido:

«e) Desarrollar **habilidades** en la **resolución pacífica** de los **conflictos** en las relaciones **personales, familiares y sociales**.

f) Fomentar el **respeto** a la **dignidad** de las personas y a la **igualdad** entre **hombres y mujeres**.»

Nueve. Se modifica la letra d) del artículo 56 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactada de la forma siguiente:

«d) La **tutoría** del **alumnado** para dirigir su **aprendizaje**, transmitirles **valores** y ayudarlos, en colaboración con los **padres**, a superar sus **dificultades** y resolver **pacíficamente** sus **conflictos**.»

Diez. Se adiciona una nueva letra g), con el consiguiente desplazamiento de la letra g) actual que pasará a ser una nueva letra h), en el apartado 2 del artículo 81 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, con el contenido siguiente:

«g) Una persona que **impulse medidas educativas** que fomenten la **igualdad real y efectiva** entre **hombres y mujeres**, residente en la **ciudad** donde se halle **emplazado** el **centro** y elegida por el **Consejo Escolar** del **centro**.»

Once. Se modifica la letra k) en el apartado 1 del artículo 82 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactado de la forma siguiente:

«k) Proponer **medidas e iniciativas** que favorezcan la **convivencia** en el **centro**, la **igualdad** entre hombres y mujeres y la **resolución pacífica** de **conflictos** en todos los ámbitos de la vida **personal, familiar y social**.»

Doce. Se añade una nueva letra g) al apartado 1 del artículo 105 de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que queda redactada de la forma siguiente:

«g) Velar por el **cumplimiento y aplicación** de las **medidas e iniciativas educativas** destinadas a fomentar la **igualdad real** entre mujeres y hombres.»

Modificación de la Ley General de Publicidad (Disposición adicional 6ª)

Uno. Se modifica el artículo 3, letra a), de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, que quedará redactado de la siguiente forma:

«Es **ilícita**:

La **publicidad** que atente contra la **dignidad** de la persona o **vulnere** los **valores y derechos** reconocidos en la **Constitución**, especialmente a los que se refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4. Se entenderán incluidos en la previsión anterior los **anuncios** que presenten a las mujeres de forma **vejatoria**, bien utilizando **particular y directamente** su **cuerpo** o partes del mismo como mero **objeto desvinculado** del producto que se pretende

promocionar, bien su imagen **asociada** a comportamientos **estereotipados** que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento **coadyuvando** a generar la violencia a que se refiere la **Ley Orgánica** de **medidas de protección integral** contra la **violencia de género**.»

Dos. Se adiciona un nuevo apartado 1 bis en el artículo 25 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, con el contenido siguiente:

«1 bis. Cuando una **publicidad** sea considerada **ilícita** por afectar a la **utilización vejatoria** o **discriminatoria** de la imagen de la mujer, podrán **solicitar** del anunciante su **cesación** y **rectificación**:

La **Delegación Especial** del **Gobierno contra** la **Violencia** sobre la **Mujer**.

El **Instituto** de la **Mujer** o su **equivalente** en el ámbito **autonómico**.

Las **asociaciones legalmente constituidas** que tengan como **objetivo único** la defensa de los **intereses** de la mujer y no incluyan como asociados a **personas jurídicas** con ánimo de **lucro**.

Los **titulares** de un **derecho** o **interés legítimo**.»

Tres. Se adiciona una disposición adicional a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, con el contenido siguiente:

«La **acción** de **cesación** cuando una **publicidad** sea considerada **ilícita** por **afectar** a la **utilización vejatoria** o **discriminatoria** de la imagen de la mujer, se **ejercitará** en la forma y en los **términos previstos** en los artículos 26 y 29, **excepto** en **materia** de **legitimación** que la tendrán, además del **Ministerio Fiscal**, las personas y las **Instituciones** a que se refiere el artículo 25.1 bis de la presente Ley.»

Modificación de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Disposición adicional 7ª)

Uno. Se introduce un nuevo apartado 7 en el artículo 37 de la **Ley** del **Estatuto** de los **Trabajadores**, texto refundido aprobado por **Real Decreto Legislativo** 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«7. La **trabajadora víctima** de **violencia de género** tendrá **derecho**, para hacer efectiva su **protección** o su derecho a la **asistencia social integral**, a la **reducción** de la **jornada de trabajo** con **disminución** proporcional del **salario** o a la **reordenación** del **tiempo de trabajo**, a través de la adaptación del **horario**, de la **aplicación** del **horario flexible** o de otras formas de **ordenación** del **tiempo de trabajo** que se utilicen en la **empresa**.

Estos **derechos** se podrán ejercitar en los términos que para estos **supuestos concretos** se establezcan en los **convenios colectivos** o en los acuerdos entre la **empresa** y los **representantes** de los **trabajadores**, o conforme al acuerdo entre la **empresa** y la **trabajadora afectada**. En su defecto, la **concreción** de estos derechos corresponderá a la trabajadora, siendo de aplicación las **reglas establecidas** en el apartado anterior, incluidas las relativas a la **resolución** de **discrepancias**.»

Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 bis) en el artículo 40 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«3 bis) La **trabajadora víctima** de **violencia** de género que se vea **obligada** a **abandonar** el **puesto de trabajo** en la **localidad** donde venía prestando sus **servicios**, para hacer efectiva su **protección** o su **derecho** a la **asistencia social integral**, tendrá **derecho** preferente a **ocupar** otro **puesto de trabajo**, del mismo grupo **profesional** o categoría **equivalente**, que la empresa tenga **vacante** en cualquier **otro** de sus **centros de trabajo**.

En tales supuestos, la **empresa** estará **obligada** a comunicar a la trabajadora las **vacantes existentes** en dicho momento o las que se pudieran **producir** en el **futuro**.

El **traslado** o el cambio de **centro de trabajo** tendrán **una duración inicial** de **6 meses**, durante los cuales la empresa tendrá la **obligación** de **reservar** el **puesto de trabajo** que anteriormente **ocupaba** la trabajadora.

Terminado este **período**, la trabajadora podrá optar entre el **regreso** a su puesto de **trabajo anterior** o la **continuidad** en el **nuevo**. En este último caso, **decaerá** la mencionada **obligación** de **reserva**.»

Tres. Se introduce una nueva letra n) en el artículo 45, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el contenido siguiente:

«n) Por **decisión** de la **trabajadora** que se vea **obligada** a **abandonar** su **puesto de trabajo** como **consecuencia** de ser **víctima** de violencia de género.»

Cuatro. Se introduce un nuevo apartado 6, en el artículo 48 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«6. En el **supuesto previsto** en la letra n) del apartado 1 del artículo 45, el **período de suspensión** tendrá una **duración inicial** que **no** podrá **exceder** de **6 meses**, salvo que de las actuaciones de **tutela judicial** resultase que la efectividad del **derecho** de **protección** de la víctima requiriese la **continuidad** de la **suspensión**. En este caso, el juez podrá **prorrogar** la suspensión por períodos de **3 meses**, con un **máximo** de **18 meses**.»

Cinco. Se introduce una nueva letra m) en el artículo 49, apartado 1, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el contenido siguiente:

«m) Por **decisión** de la trabajadora que se vea **obligada** a **abandonar definitivamente** su **puesto de trabajo** como **consecuencia** de ser **víctima** de violencia de género.»

Seis. Se modifica el párrafo segundo de la letra d) del artículo 52 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«**No** se **computarán** como **faltas** de **asistencia**, a los efectos del párrafo anterior, las **ausencias** debidas a **huelga legal** por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de **representación legal** de los trabajadores, **accidente** de trabajo, **maternidad**, **riesgo** durante el **embarazo**, **enfermedades** causadas por **embarazo**, **parto** o **lactancia**, **licencias** y **vacaciones**, **enfermedad** o **accidente no laboral**, cuando la baja haya sido acordada por los **servicios sanitarios oficiales** y tenga una duración de **más** de **20 días consecutivos**, ni las motivadas por la situación **física** o **psicológica** derivada de violencia de género, acreditada por los servicios **sociales** de **atención** o servicios de **salud**, según proceda.»

Siete. Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 55, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido:

«b) El de las **trabajadoras embarazadas**, desde la fecha de **inicio** del **embarazo** hasta la del comienzo del **período** de **suspensión** a que se refiere la letra a); la de los trabajadores que hayan **solicitado** uno de los **permisos** a los que se refieren los **apartados** 4 y 5 del artículo 37 de esta Ley, o estén **disfrutando** de ellos, o hayan solicitado la **excedencia** prevista en el apartado 3 del artículo 46 de la misma; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los **derechos** de **reducción** o **reordenación** de su **tiempo de trabajo**, de **movilidad geográfica**, de **cambio** de **centro** de **trabajo** o de **suspensión** de la **relación laboral**, en los términos y condiciones reconocidos en esta Ley.»

Modificación de la Ley General de la Seguridad Social (Disposición adicional 8ª)

Uno. Se añade un apartado 5 en el artículo 124 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«5. El **período** de **suspensión** con reserva del **puesto de trabajo**, contemplado en el artículo 48.6 del **Estatuto** de los **Trabajadores**, tendrá la consideración de **período** de **cotización efectiva** a efectos de las correspondientes **prestaciones** de la **Seguridad Social** por **jubilación**, **incapacidad permanente**, **muerte** o **supervivencia**, **maternidad** y **desempleo**.»

Dos. Se modifica la letra e) del apartado 1.1, así como el apartado 1.2 del artículo 208 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«1.1.e) Por resolución voluntaria por parte del trabajador, en los supuestos previstos en los artículos 40, 41.3, 49.1.m) y 50 del Estatuto de los Trabajadores.

1.2 Cuando se **suspenda** su **relación laboral** en virtud de **expediente** de **regulación** de **empleo**, o de **resolución judicial** adoptada en el **seno** de un **procedimiento concursal**, o en el supuesto contemplado en la letra n), del apartado 1 del artículo 45 del **Estatuto de los Trabajadores**.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 210 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«2. A efectos de **determinación** del **período de ocupación** cotizada a que se refiere el apartado anterior se tendrán en cuenta todas las **cotizaciones** que **no** hayan sido **computadas** para el **reconocimiento** de un **derecho anterior**, tanto de nivel **contributivo** como **asistencial**. No obstante, no se considerará como **derecho anterior** el que se reconozca en **virtud** de la **suspensión** de la **relación laboral** prevista en el artículo 45.1.n) del **Estatuto de los Trabajadores**.

No se computarán las **cotizaciones** correspondientes al **tiempo de abono** de la prestación que efectúe la **entidad gestora** o, en su caso, la **empresa**, excepto cuando la **prestación** se perciba en virtud de la **suspensión** de la **relación laboral** prevista en el artículo 45.1.n) del **Estatuto de los Trabajadores**, tal como establece el artículo 124.5 de esta Ley.»

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 231 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«2. A los efectos previstos en este título, se entenderá por **compromiso** de **actividad** el que adquiera el **solicitante** o **beneficiario** de las prestaciones de buscar **activamente empleo**, aceptar una **colocación adecuada** y participar en **acciones específicas** de **motivación, información, orientación, formación, reconversión** o **inserción profesional** para incrementar su **ocupabilidad**, así como de cumplir las restantes **obligaciones previstas** en este artículo.

Para la **aplicación** de lo **establecido** en el párrafo anterior el **Servicio Público** de **Empleo** competente tendrá en cuenta la **condición** de víctima de violencia de género, a efectos de **atemperar**, en caso necesario, el **cumplimiento** de las **obligaciones** que se deriven del **compromiso suscrito**.»

Cinco. Se introduce una nueva disposición adicional en la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con el siguiente contenido:

«Disposición adicional cuadragésima segunda. **Acreditación** de situaciones **legales** de **desempleo**.

La situación legal de desempleo prevista en los artículos 208.1.1e) y 208.1.2 de la presente Ley, cuando se refieren, respectivamente, a los artículos 49.1 m) y 45.1

n) de la **Ley del Estatuto de los Trabajadores**, se acreditará por **comunicación escrita** del empresario sobre la **extinción** o **suspensión temporal** de la **relación laboral**, junto con la orden de **protección** a favor de la víctima o, en su defecto, junto con el **informe** del **Ministerio Fiscal** que indique la **existencia** de indicios sobre la **condición** de **víctima** de violencia de género.»

Modificación de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública (Disposición adicional 9ª)

Uno. El apartado 3 del artículo 1 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, tendrá la siguiente redacción:

«3. Se consideran **bases** del **régimen estatutario** de los **funcionarios públicos**, dictadas al **amparo** del artículo 149.1.18.ª de la **Constitución**, y en consecuencia aplicables al **personal** de todas las **Administraciones Públicas**, los siguientes preceptos: artículos: 3.2.e) y f); 6; 7; 8; 11; 12; 13.2, 3 y 4; 14.4 y 5; 16; 17; 18.1 a 5;

19.1 y 3; 20.1.a), b), párrafo primero, c), e), g) en sus párrafos primero a cuarto, e i),

2 y 3; 21; 22.1, a excepción de los dos últimos párrafos; 23; 24; 25; 26; 29, a

excepción del último párrafo de sus apartados 5, 6 y 7; 30.5; 31; 32; 33; disposiciones adicionales tercera, 2 y 3, cuarta, duodécima y decimoquinta; disposiciones transitoria segunda, octava y novena.»

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 17 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

«3. En el marco de los **Acuerdos** que las **Administraciones Públicas** suscriban con la **finalidad** de facilitar la **movilidad** entre los funcionarios de las mismas, tendrán **especial consideración** los casos de **movilidad geográfica** de las **funcionarias víctimas** de violencia de género.»

Tres. Se añade una letra i) al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con el siguiente contenido:

«i) La **funcionaria víctima** de violencia sobre la mujer que se vea obligada a **abandonar** el **puesto de trabajo** en la **localidad** donde venía **prestando** sus **servicios**, para hacer efectiva su **protección** o su **derecho** a la **asistencia social integral**, tendrá **derecho** preferente a **ocupar** otro **puesto de trabajo** propio de su **Cuerpo** o **Escala** y de análogas características que se encuentre **vacante** y sea de necesaria **provisión**. En tales supuestos la **Administración Pública** competente en cada caso estará obligada a comunicarle las **vacantes** de necesaria **provisión** ubicadas en la misma **localidad** o en las **localidades** que la interesada expresamente solicite.»

Cuatro. Se añade un nuevo apartado 8 en el artículo 29 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, con el siguiente contenido:

«8. **Excedencia** por razón de **violencia** sobre la **mujer funcionaria**.

Las **funcionarias públicas** víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su **protección** o su **derecho** a la asistencia **social integral**, tendrán derecho a **solicitar** la situación de **excedencia sin necesidad** de haber prestado un **tiempo mínimo** de **servicios previos** y sin que resulte de aplicación **ningún plazo** de permanencia en la misma. Durante los **6** primeros **meses** tendrán **derecho** a la reserva del **puesto de trabajo** que **desempeñaran**, siendo **computable** dicho **período** a efectos de **ascensos**, **trienios** y **derechos pasivos**.

Esto no obstante, cuando de las actuaciones de **tutela judicial** resultase que la efectividad del **derecho** de **protección** de la víctima lo **exigiere**, se podrá **prorrogar** por períodos de **3 meses**, con un **máximo** de **18**, el período en el que, de acuerdo con el párrafo anterior, se tendrá derecho a la **reserva** del puesto de trabajo, con **idénticos** efectos a los señalados en dicho párrafo.»

Cinco. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 30 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública con el siguiente contenido:

«5. En los casos en los que las funcionarias víctimas de violencia de género tuvieran que **ausentarse** por ello de su **puesto de trabajo**, estas **faltas** de **asistencia**, **totales** o **parciales**, tendrán la consideración de **justificadas** por el **tiempo** y en las condiciones en que así lo determinen los **servicios sociales** de **atención** o **salud**, según proceda.

Las funcionarias víctimas de violencia sobre la mujer, para hacer efectiva su **protección** o su derecho a la **asistencia social integral**, tendrán **derecho** a la **reducción** de la **jornada** con **disminución** proporcional de la **retribución**, o a la **reordenación** del **tiempo de trabajo**, a través de la **adaptación** del horario, de la aplicación del **horario flexible** o de otras formas de **ordenación** del tiempo de trabajo que sean aplicables, en los términos que para estos supuestos establezca la **Administración Pública** competente en cada caso.»

Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Disposición adicional 10ª)

Uno. Se modifica el apartado segundo del artículo 26 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 26.

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo **Mercantil**, de Violencia sobre la Mujer, de lo **Penal**, de lo **Contencioso-Administrativo**, de lo **Social**, de **Menores** y de **Vigilancia Penitenciaria**.»

Dos. Se modifica la rúbrica del capítulo V del título IV del libro I de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactada de la siguiente forma:

«Capítulo V. De los **Juzgados de Primera Instancia e Instrucción**, de lo **Mercantil**, de lo **Penal**, de **Violencia sobre la Mujer**, de lo **Contencioso-Administrativo**, de lo **Social**, de **Vigilancia Penitenciaria** y de **Menores**.»

Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 87 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 87.

Los **Juzgados de Instrucción** conocerán, en el orden penal:

De la **instrucción** de las **causas por delito** cuyo enjuiciamiento corresponda a las **Audiencias Provinciales** y a los **Juzgados de lo Penal**, excepto de aquellas causas que sean competencia de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

Les corresponde asimismo dictar **sentencia** de conformidad con la **acusación** en los casos establecidos por la Ley.

Del **conocimiento** y **fallo** de los juicios de **faltas**, salvo los que sean competencia de los **Jueces de Paz**, o de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**.

De los procedimientos de "**habeas corpus**".

De los recursos que establezca la ley **contra** las **resoluciones** dictadas por los **Juzgados de Paz** del **partido** y de las cuestiones de **competencia** entre éstos.

De la adopción de la **orden de protección** a las víctimas de **violencia** sobre la **mujer** cuando esté **desarrollando** funciones de **guardia**, siempre que no pueda ser **adoptada** por el **Juzgado de Violencia sobre la Mujer**.»

Tres bis. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 2, del artículo 89 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el contenido siguiente:

«A fin de facilitar el **conocimiento** de los asuntos instruidos por los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, y atendiendo al número de **asuntos existentes**, deberán **especializarse 1 o varios** Juzgados en cada **provincia**, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 de la presente Ley.»

Cuatro. Se modifica el apartado 1 del artículo 210 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«1. Los **Jueces de Primera Instancia** y de **Instrucción**, de lo **Mercantil**, de lo **Penal**, de **Violencia sobre la Mujer**, de lo **Contencioso-Administrativo**, de **Menores** y de lo **Social** se **sustituirán** entre sí en las poblaciones donde existan varios del mismo **orden jurisdiccional**, en la forma que acuerde la **Sala de Gobierno** del **Tribunal Superior de Justicia**, a propuesta de la **Junta de Jueces**.»

Cinco. Se adiciona un nuevo párrafo en el apartado 3 en el artículo 211 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que queda redactado de la siguiente forma:

«Los **Jueces de Violencia sobre la Mujer** serán **sustituidos** por los **Jueces de Instrucción** o de **Primera Instancia e Instrucción**, según el orden que establezca la **Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia respectivo**.»

Evaluación de la aplicación de la Ley (Disposición adicional 11ª)

El **Gobierno**, en colaboración con las **Comunidades Autónomas**, a los **3 años** de la entrada en vigor de esta **Ley Orgánica** elaborará y remitirá al **Congreso de los Diputados** un **informe** en el que se hará una **evaluación** de los **efectos** de su aplicación en la **lucha** contra la **violencia de género**.

Modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Disposición adicional 12ª)

Se añade una disposición adicional cuarta a la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el contenido siguiente:

«1. Las **referencias** que se hacen al **Juez de Instrucción** y al **Juez de Primera Instancia** en los apartados 1 y 7 del artículo 544 ter de esta Ley, en la redacción dada por la Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la

Orden de Protección de las **Víctimas** de la **Violencia Doméstica** se entenderán hechas, en su caso, al **Juez** de **Violencia sobre la Mujer**.

Las referencias que se hacen al **Juez** de **Guardia** en el título III del libro IV, y en los artículos 962 a 971 de esta Ley, se entenderán hechas, en su caso, al **Juez** de **Violencia sobre la Mujer**.»

Dotación del Fondo (Disposición adicional 13ª)

Con el fin de **coadyuvar** a la puesta en **funcionamiento** de los servicios establecidos en el artículo 19 de esta Ley, y **garantizar** la **equidad interterritorial** en su **implantación**, durante los **2 años** siguientes a la entrada en vigor de esta Ley se **dotará** un **Fondo** al que podrán **acceder** las **Comunidades Autónomas**, de acuerdo con los **critérios objetivos** que se determinen en la respectiva **Conferencia Sectorial**. Ello, no obstante, la Comunidad Autónoma del **País Vasco** y la **Comunidad Foral de Navarra** se regirán, en estos aspectos financieros, por sus regímenes especiales de **Concierto Económico** y de **Convenio**.

Las **Comunidades Autónomas**, en uso de sus competencias, durante el **año siguiente** a la **aprobación** de esta Ley, realizarán un **diagnóstico** conjuntamente con las **Administraciones Locales**, sobre el **impacto** de la **violencia** de **género** en su **Comunidad**, así como una **valoración** de **necesidades, recursos y servicios** necesarios, para implementar el artículo 19 de esta Ley.

La **dotación** del **Fondo** se hará de conformidad con lo que **dispongan** las respectivas **Leyes** de **Presupuestos Generales del Estado**.

Informe sobre financiación (Disposición adicional 14ª)

Sin perjuicio de la **responsabilidad financiera** de las **Comunidades Autónomas**, conforme a lo establecido en la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las **medidas fiscales y administrativas** del nuevo sistema de **financiación** de las Comunidades Autónomas de **régimen común** y **Ciudades con Estatuto de Autonomía**, y de acuerdo con el principio de **lealtad institucional** en los términos del artículo 2.1.e) de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de **Financiación** de las Comunidades Autónomas, los **Ministerios** competentes, a propuesta de los **órganos interterritoriales** correspondientes, elaborarán **informes** sobre las **repercusiones económicas** de la aplicación de esta Ley. Dichos informes serán presentados al **Ministerio de Economía y Hacienda** que los trasladará al **Consejo de Política Fiscal y Financiera**.

Convenios en materia de vivienda (Disposición adicional 15ª)

Mediante **convenios** con las **Administraciones competentes**, el **Gobierno** podrá **promover** procesos **específicos** de **adjudicación** de **viviendas** protegidas a las **víctimas** de violencia de género.

Coordinación de los Servicios Públicos de Empleo (Disposición adicional 16ª)

En el desarrollo de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de **Empleo**, se tendrá en cuenta la necesaria **coordinación** de los **Servicios Públicos** de **Empleo**, para **facilitar** el acceso al **mercado de trabajo** de las **víctimas** de violencia de género cuando, debido al **ejercicio** del **derecho** de **movilidad geográfica**, se vean obligadas a trasladar su **domicilio** y el mismo implique cambio de **Comunidad Autónoma**.

Escolarización (Disposición adicional 17ª)

Las **Administraciones educativas** adoptarán las medidas necesarias para **garantizar** la **escolarización** **inmediata** de los **hijos** en el supuesto de **cambio** de **residencia** motivados por **violencia** sobre la mujer.

Planta de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (Disposición adicional 18ª)

Se añade un anexo XIII a la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, cuyo texto se incluye como anexo a la presente Ley Orgánica.

Fondo de garantía de pensiones de alimentos (Disposición adicional 19ª)

En el marco de la **protección** contra la **violencia económica** en los términos previstos en esta ley, el **Estado** **garantizará** el **pago** de **alimentos** reconocidos e **impagados** a favor de los **hijos** e **hijas menores** de **edad** en convenio **judicialmente aprobado** o en **resolución judicial**, a través de una **legislación específica** que

concretará el **sistema de cobertura** en dichos supuestos y que, en todo caso, tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género.

Para reforzar las medidas de **apoyo** a las víctimas de **violencia económica**, el **Gobierno** modificará la **regulación** actual del **Fondo de Garantía de Pensiones** en el sentido de mejorar su **accesibilidad**, su **eficacia** y su **dotación económica**, a través de la **modificación** del **Real Decreto 1618/ 2007**, de 7 de diciembre, sobre **organización y funcionamiento** del **Fondo de Garantía del Pago de Alimentos**.

Cambio de apellidos (Disposición adicional 20ª)

El artículo 58 de la Ley del Registro Civil, de 8 de junio de 1957, queda redactado de la siguiente forma:

«2. Cuando se den **circunstancias excepcionales**, y a pesar de faltar los requisitos que señala dicho artículo, podrá **accederse** al **cambio** por **Real Decreto** a propuesta del **Ministerio de Justicia**, con audiencia del **Consejo de Estado**. En caso de que el solicitante de la **autorización** del **cambio** de sus apellidos sea **objeto** de **violencia de género** y en cualquier otro supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiriera podrá accederse al cambio por **Orden** del **Ministerio de Justicia**, en los términos fijados por el **Reglamento**.»

Macroencuesta de violencia contra la mujer (Disposición adicional 21ª)

La **Delegación del Gobierno** contra la **Violencia de Género** realizará y **publicará** los **resultados** de la **Macroencuesta** de **violencia contra la mujer** prevista en el artículo 29 de esta ley con una periodicidad **mínima trienal**.

Aplicación de medidas (Disposición transitoria 1ª)

Los **procesos civiles** o **penales** relacionados con la **violencia de género** que se encuentren en **tramitación** a la entrada en **vigor** de la presente **Ley** continuarán siendo **competencia** de los **órganos** que vinieran **conociendo** de los mismos hasta su **conclusión** por **sentencia firme**.

Derecho transitorio (Disposición transitoria 2ª)

En los procesos sobre hechos contemplados en la presente Ley que se encuentren en **tramitación** a su entrada en **vigor**, los **Juzgados** o **Tribunales** que los estén conociendo podrán **adoptar** las **medidas** previstas en el capítulo IV del título V.

Normas derogadas (Disposición derogativa única)

Quedan **derogadas** cuantas **normas**, de **igual** o **inferior rango**, se **opongan** a lo establecido en la presente Ley.

Referencias normativas (Disposición final 1ª)

Todas las **referencias** y **menciones** contenidas en las **leyes procesales penales** a los **Jueces de Instrucción** deben también entenderse referidas a los **Jueces de Violencia sobre la Mujer** en las materias propias de su **competencia**.

Habilitación competencial (Disposición final 2ª)

La presente Ley se dicta al amparo de lo previsto en el artículo 149.1, 1.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 17.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución Española.

Naturaleza de la presente Ley (Disposición final 3ª)

La presente **Ley** tiene el **carácter** de **Ley Orgánica**, a excepción de los siguientes **preceptos**: título I, título II, título III, artículos 42, 43, 44, 45, 46, 47, 70, 71, 72, así como las disposiciones adicionales primera, segunda, sexta, séptima, octava, novena, undécima, decimotercera, decimoquinta, decimosexta, decimoséptima, decimoctava, decimonovena y vigésima, la disposición transitoria segunda y las disposiciones finales cuarta, quinta y sexta.

Habilitación normativa (Disposición final 4ª)

Se habilita al **Gobierno** para que **dicte**, en el plazo de **6 meses** a partir de la publicación de esta **Ley** en el «**Boletín Oficial del Estado**», las **disposiciones** que fueran necesarias para su **aplicación**.

A través del **Ministerio de Justicia** se adoptarán en el referido plazo las medidas necesarias para la **implantación** de los **Juzgados de Violencia sobre la Mujer**, así como para la **adecuación** de la **estructura** del **Ministerio Fiscal** a las previsiones de la presente Ley.

En el plazo de **6 meses** desde la entrada en **vigor** de la presente **Ley Orgánica** el **Consejo General del Poder Judicial** dictará los **reglamentos** necesarios para la **ordenación** de los **señalamientos, adecuación** de los **servicios de guardia** a la existencia de los **nuevos Juzgados** de Violencia sobre la Mujer, y **coordinación** de la **Policía Judicial** con los referidos Juzgados.

Modificaciones reglamentarias (Disposición final 5º)

El **Gobierno**, en el plazo de **6 meses** desde la aprobación de esta Ley, procederá a la **modificación** del artículo 116.4 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el **Reglamento Penitenciario**, estableciendo la **obligatoriedad** para la **Administración Penitenciaria** de realizar los **programas específicos de tratamiento** para **internos** a que se refiere la presente **Ley**. En el mismo plazo se procederá a **modificar** el **Real Decreto 738/1997**, de 23 de mayo, por el que se aprueba el **Reglamento** de ayudas a las víctimas de **delitos violentos** y contra la **libertad sexual**, y el Real Decreto 996/2003, por el que se aprueba el **Reglamento** de **asistencia jurídica gratuita**.

En el plazo mencionado en el apartado anterior, el **Estado** y las **Comunidades Autónomas**, en el ámbito de sus respectivas **competencias**, **adaptarán** su **normativa** a las **previsiones** contenidas en la presente **Ley**.

Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita (Disposición final 6º)

Se modifica el apartado 5 del artículo 3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Gratuita, que quedará redactado como sigue:

«5. **Tampoco** será necesario que las **víctimas** de violencia de género **acrediten** previamente **carecer** de **recursos** cuando soliciten **defensa jurídica gratuita especializada**, que se les **prestará** de **inmediato**, **sin perjuicio** de que si no se le **reconoce** con **posterioridad** el derecho a la misma, éstas deban **abonar** al **abogado** los honorarios **devengados** por su **intervención**.»

Entrada en vigor (Disposición final 7º)

La presente **Ley Orgánica** entrará en **vigor** a los **30 días** de su **publicación** en el **Boletín Oficial del Estado**, salvo lo dispuesto en los títulos IV y V, que lo hará a los **6 meses**.